



**DESPLAZADOS
INTERNOS
EN ANTIOQUÍA**

Copyright **CORPORACION DE PROMOCION POPULAR**
Personería jurídica 1467 148 Minjusticia
A.A 9690 Medellín - Colombia

Esta obra fue financiada por la **Consejería en proyectos
para refugiados Latinoamericanos de Costa Rica.**

**INFORME SOBRE
INVESTIGACIÓN**

**«DESPLAZADOS INTERNOS
EN ANTIOQUIA»**

**ÁREA DE DERECHOS HUMANOS Y
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

**INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN
(IPC)**

Medellín, Noviembre de 1.995

AGRADECIMIENTOS A:

**Patricia Nieto,
Vicente Peña,
Padre Rubén Darío Ospina y
Juan Gil Blas**

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 5.

ESTADO DE LA REFLEXIÓN ACTUAL 9.

El concepto de desplazado interno; El problema de los desplazados en Antioquia.

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LAS VIOLENCIA EN ANTIOQUIA 17.

1. Los desplazados de Antioquia en Medellín 17;
2. El caso de Urabá 20; 3. Desplazados del occidente Antioqueño 21;
4. Situación socio-económica de los desplazados en Medellín 23;
5. El papel de la iglesia 25; 6. El desplazamiento interno en la ciudad: una realidad 27; 7. Agentes del desplazamiento en la ciudad 32;
8. Bandas juveniles y delincuencia 34; 9. Milicias populares 36;
10. Las milicias reinsertadas 37; 11. La reubicación 41;
12. El problema de las invasiones y los desalojos 42;
13. Organizaciones no gubernamentales, que captan recursos de organismos nacionales e internacionales para la atención al desplazado 44;
14. Cronología del desplazamiento en Antioquia 45.

TESTIMONIOS 67

Testimonio de una desplazada del nordeste 67; Testimonio de una desplazada de la época de la violencia 69; Testimonio de una niña desplazada 71; Testimonio del desplazamiento 72; Los rostros del desplazamiento 76.

Anexo 79.

Generalidades sobre las regiones Antioqueñas afectadas por el desplazamiento.

Urabá 79; Grupos ilegales Armados de la región 81; Organismos de seguridad del estado en la región 81.

Oriente Antioqueño 82; Grupos ilegales en la región 83.

Suroeste Antioqueño 83; Grupos ilegales en la región 84; Organismos de seguridad del estado en la región 85.

Nordeste 85; Grupos ilegales en el Nordeste 87; Organismos de seguridad del estado en la región 87.

Magdalena Medio Antioqueño 88; Organizaciones ilegales que operan en la región 89; Organismos de seguridad del estado 89.

Bajo Cauca 90; Grupos ilegales en la región 90; Organismos de seguridad del estado 90.

Bibliografía parcial 91.

PRESENTACIÓN

En el desplazamiento forzado podemos encontrar una de las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. A pesar de tratarse de un fenómeno poco estudiado en Medellín, no significa que la problemática sea reciente o no se haya percibido en diversos sectores de la sociedad antioqueña.

Desde hace unos pocos años en el país, específicamente en la comunidad de derechos humanos, se viene profundizando y alertando sobre la gravedad del problema. Miles son los desplazados en Colombia y, tristemente, nuestro departamento vuelve a destacarse como una región con un número importante de víctimas de desplazamientos forzados internos.

Nuestro interés con la presente consulta es hacer un aporte propositivo para enfrentar la gravedad del problema en nuestra ciudad con otra mentalidad y hemos considerado importante ofrecerle a la comunidad de derechos humanos, pero principalmente a la opinión pública

algunas primeras indagaciones al respecto. Encontrarán una primera parte donde presentamos el Estado parcial de las reflexiones sobre el desplazamiento interno en el departamento; seguidamente verán como se percibe el fenómeno en nuestra ciudad.

Ha sido además importante para nosotros, en el Instituto Popular de Capacitación, a pesar de tratarse de un estudio situado en un espacio muy concreto y, quizás provinciano, habernos introducido, muy superficialmente todavía, a la misma problemática en Centroamérica y Perú, a través de trabajos como los encabezados por Luis Raúl Salvadó y Diana Avila, respectivamente. Todo ello además de haber compartido en diversos foros y eventos, la misma problemática con víctimas, investigadores y activistas de derechos humanos, académicos y especialistas de otras regiones del país.

Para la presente consulta contamos con el apoyo y los testimonios dolorosos de diversas víctimas del desplazamiento que hoy sobre-viven en la ciudad y que gentilmente aceptaron romper nuevamente su silencio; de organizaciones no gubernamentales locales comprometidas con la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos; con diversos funcionarios públicos de carácter municipal y departamental adscritos a la Consejería Presidencial para Medellín, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Asesores de Paz en la Alcaldía de Medellín, Planeación Departamental y Municipal; programas independientes como los de Naciones Unidas a nivel Municipal y Departamental; sectores de la iglesia; centros de documentación e investigación regional y la colaboración de otras organizaciones no gubernamentales del país que nos proporcionaron información valiosa. A todos ellos les ofrecemos nuestro sincero agradecimiento y les renovamos nuestro deseo de seguir contribuyendo a disminuir el sufrimiento de las numerosas víctimas de violaciones a los derechos humanos, que innegablemente se presentan en nuestra ciudad.

En el pasado, el Instituto Popular de Capacitación, vivió una experiencia de atención a víctimas de la violencia que debieron desplazarse;

y varios años después, al conocer otras experiencias nacionales o internacionales cercanas, nos queda la sensación de que no solo se trata de una problemática donde la comunidad internacional viene jugando un rol cada vez mayor, sino que también hay unos elementos comunes, quizás universales, que vienen caracterizando el fenómeno del desplazamiento interno. Por ejemplo, nadie niega que la violencia es el principal factor que provoca desplazamientos masivos o individuales.

Pero también encontrarán diferencias que puede variar significativamente las políticas y las posibilidades de apoyo en la práctica, por ejemplo, el concepto de desplazamiento interno no cuenta con un consenso total entre el Estado colombiano y las organizaciones no gubernamentales. Se discute si las causas del desplazamiento interno corresponden a acciones emprendidas por el hombre o si también se incluyen las causadas por los desastres naturales. En todo caso, Francis Deng, representante del Secretario General de Naciones Unidas para estudiar el fenómeno de los desplazados internos en Colombia, nos propone la necesidad de «llegar a un acuerdo sobre la definición práctica que pudiera usarse en el país de modo flexible como base para agilizar el empleo de los recursos». Parece una discusión sin sentido puesto que el desplazamiento forzado es un fenómeno real en Colombia, lo cierto, es que la definición de una política clara y coherente con la magnitud del problema, requiere de una definición e identificación lo más precisa y flexible de la problemática en cuestión.

Como siempre, queda mucho por hacer. Se requiere, entre otras cosas, renovar voluntades, investigar con mayor detalle el problema, atender urgentemente a las víctimas de desplazamiento, trabajar para frenar las causas del mismo, buscar políticas integrales de asistencia humanitaria, reubicación y retorno.

ESTADO DE LA REFLEXIÓN ACTUAL

EL CONCEPTO DE DESPLAZADO INTERNO

De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por las Naciones Unidas, hay en el mundo actualmente más de 24 millones de refugiados y desplazados internos. En términos generales se señala el refugio y desplazamiento como expresiones que reflejan intensamente los dramas humanos de personas que, bajo la constante de abusos y violaciones de derechos humanos, prácticamente se les han destruido el tejido de las relaciones sociales, culturales, económicas, psíquicas, etc.

Los refugiados son ante todo víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Las Naciones Unidas reconocieron, desde sus comienzos, que la tarea de protección de estas personas era una cuestión de interés internacional.

En el ámbito de la competencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se define como refugiado a cualquier persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera acogerse a la protección de ese país, o que, por carácter de nacionalidad y estar fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no puede o, a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera regresar a él...» considera también como refugiado a las personas que han salido de sus países porque sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

El primer criterio de diferenciación se origina en el *destino* del flujo migratorio. Así, cuando el proceso de éxodo se realizó hacia otro país, se habla de *refugiados o éxilio exterior* y cuando se produjo hacia otra región o localidad del mismo país nos referimos a los *desplazados internos, desplazamiento forzoso o éxilio interior*.

Hay quienes muestran incluso el desplazamiento interno como un momento inicial, en la mayoría de los casos, al éxilio exterior. Es el caso de Diana Avila quien plantea que el refugiado no es otra cosa que un desplazado interno que atraviesa la frontera de su país en busca de refugio. Vale anotar que los refugiados, a diferencia de los desplazados, cuentan con un estatus reconocido internacionalmente por las Naciones Unidas que obliga a brindarle protección. El caso de los desplazados internos es diferente. No cuentan con un reconocimiento similar al refugiado y no tienen más protección, en la mayoría o en los mejor de los casos, que la ayuda ofrecida a la población civil en medio de un conflicto interno donde, no en pocas ocasiones, son además víctimas de las partes en confrontación.

Según las organizaciones no gubernamentales que agencian los asuntos del ACNUR en Colombia, no hay actualmente más de 600 refugiados extranjeros en nuestro país. y se piensa que existen más de 17 millones de refugiados en el mundo hoy en día.

En centroamérica, el equipo de investigadores encabezado por Luis Raúl Salvadó, desarrolló, entre otros, el concepto de migración masiva por violencia, que la entendían como un proceso vinculado a la crisis de los ochenta o una combinación de dos crisis, la política en un lado y económica por el otro, y en su combinación alteraron toda la dinámica socio-política previa. Se produjo, en ese marco, «una profunda crisis de legitimidad del orden político», que aparece como una serie de enfrentamientos de diverso tipo entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

En Medellín, como ocurre en muchas partes del mundo, al ofrecer la violencia como una categoría de la migración (migración por violencia), resulta útil y descriptiva hasta cierto punto, pues es a la vez muy general, ante la diversidad de factores, actores, escenarios, etc. El conjunto poblacional del que buscamos dar cuenta es diverso en muchos sentidos, pero también guardan muchas similitudes entre sí. Las víctimas del desplazamiento forzado comparten, muchas veces, semejanzas en sus causas, en el lugar de destino inmediata a la migración, en el origen social, en el tipo de relaciones que se establecen en el lugar de asentamiento, en el carácter político (real o atribuido) de los desplazados, entre otras razones. De tal manera que la violencia no es un concepto abstracto, tiene nombres de victimarios y víctimas, lugares y fechas, y no hay razón alguna para dejar de señalarlos.

En todo caso, por el momento, la temática del refugio interno y del desarraigo forzoso no se halla todavía adecuadamente regulada por el derecho internacional. Mucho menos, en el caso colombiano, de una legislación interna adecuada que los proteja.

También existen proceso de desplazamiento claramente identificados como económicos, en sus orígenes y motivaciones, al cual se les conoce como *migración tradicional*; sin embargo, es importante recono-

cer que un emigrante económico puede constituirse o convertirse, en un momento dado, en un emigrante por violencia; también podría decirse que el mero hecho de tener que desplazarse por razones económicas es violento o que puede responder a decisiones políticas del Estado.

En América Central, el mismo equipo de investigadores antes mencionado, caracterizaron el desplazado como aquella persona o personas que se han visto forzadas a cambiar su lugar de residencia en el país por razones vinculadas al desarrollo político-militar de la crisis regional. El desplazamiento interno, entonces, es el proceso general del éxodo interno, desde la expulsión hasta su posible resolución:

- ✓ inserción en una nueva localidad o región, o
- ✓ retorno (también llamado repoblamiento) al lugar donde se originó la migración.

EL PROBLEMA DE LOS DESPLAZADOS EN ANTIOQUIA

Antioquia y su capital Medellín han sido tristemente célebres por haber confluído sobre sus tierras, en un verdadero diluvio, todas las coordenadas que han cruzado la violencia en Colombia.

En 1991 se realizó un encuentro nacional promovido por ILSA, para conocer en mas detalle las características del desplazamiento interno en Colombia. Los representantes de las regiones allí presentes, identificaron algunas de las causas del desplazamiento especialmente en los cinco años anteriores a ese evento. Algunas de estas causas que se señalaron fueron:

- ✓ Fenómenos económicos y políticos, que motivan la búsqueda de mejores condiciones de vida a las producidas por las injustas estructuras sociales.
- ✓ La lucha por la tierra ha sido la base de la violencia armada.
- ✓ El narcotráfico, mediante la compra de tierras, unas adquiridas por ventas voluntarias y gruesas sumas de dinero y otras bajo presión o intimidación.
- ✓ El conflicto armado interno, por el temor de verse involucrados en medio del conflicto militar.

Sobre el primer ítem los representantes del departamento de Antioquia, denunciaron un amplio mosaico de situaciones, por ejemplo los del Nordeste antioqueño manifestaron que la «bonanza del oro», reforzó enormemente la afluencia de inmigrantes esperanzados en una forma rápida de enriquecimiento. También expresaban que la carencia de condiciones de vida dignas, para la mayoría de la población, disparaba el clima de tensión que se respira en la región. Denunciaron que los dueños de grandes minas contratan paramilitares para atentar contra los varequeros y cientos de pequeños mineros, que en ocasiones invaden las minas para buscar su sustento. Muchas de estas muertes y masacres, como la ocurrida en Segovia en 1988, donde murieron 50 personas, donde confluyen no solo uno, sino varios actores al mismo tiempo como agentes agresores (retaliación del narcotráfico, militares, terratenientes, etc) han generado grandes desplazamientos de la población.

Sobre el narcotráfico es importante señalar como el departamento de Antioquia ha servido por mucho tiempo como base de operaciones de los carteles de la droga, los cuales crearon verdaderos santuarios para su negocio en regiones como el Magdalena medio y Urabá, en la parte rural y en Medellín en la zona urbana. Si bien estos carteles fueron virtualmente desmantelados en su estructura militar con la muerte de Pablo Escobar el día 2 de diciembre de 1993. Los últimos estudios sobre el tema revelan que las rutas del tráfico de droga y la estructura financiera de estos permanecen intactas, incentivando el fenómeno de la compra de tierras. En la capital antioqueña y Urabá en el último año se ha mostrado igualmente un preocupante recrudecimiento del paramilitarismo auspiciado por los narcos.

El último estudio de carácter nacional sobre desplazados por la violencia publicado hace tan solo unos pocos meses por la Conferencia Episcopal de Colombia, ratificó ese oscuro panorama de la realidad del desplazamiento en Antioquia.

DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (según departamento al que han llegado)			
Departamento	Nº desplaz.	Pnas/flia	% del total
Santander	104.728	7,0	17,86
Cundinamarca*	85.818	4,61	4,64
<u>Antioquia</u>	<u>60.611</u>	<u>5,8</u>	<u>10,34</u>
Córdoba	48.999	7,3	8,34
N. de Santander	45.553	6,8	7,76
Sub-total	345.709		58,97
Otros	240.552		41,03
Total	586.261	5,4	100,00

* Incluye Bogotá

El total es igual al 1,72% de la población de Colombia

FUENTE: Avance investigativo del diagnóstico sobre desplazados interno, Sección de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Colombia, 1994.

De este cuadro podemos sacar unas primeras conclusiones:

- ✓ Todos los causantes del fenómeno del desplazamiento en los últimos 10 años, que arrojó una cifra cercana a las 600.000 personas en el país, están presentes en los departamentos. La guerrilla causante del 31.9% del total nacional, los paramilitares 21.1%, los militares 19.6%, la policía y los organismos de seguridad 7% y los narcotraficantes 4%, a esto agregamos el fenómeno de las milicias populares y las bandas juveniles, cuya incidencia está por determinarse en esta investigación.
- ✓ Según los datos adicionales mas de la mitad de las familias no están dispuestas a retornar a sus lugares de origen a pesar de que el 83% manifestó no haber recibido ninguna ayuda, y el resto ha dependido enteramente de sus familias y amigos.

¹ Urabá; el mayor éxodo de los últimos tiempos. Grupo de apoyo a desplazados, junio 2 de 1995.

✓ Es todavía muy difícil determinar con cierta precisión la real dimensión del desplazamiento interno forzado, ya que este se realiza en una forma clandestina, subterránea, donde las víctimas salen silenciosamente, con el agravante incluso de que la preocupación principal es que nadie se entere de su huida o situación de éxodo.

Otro estudio reciente sobre la región de Urabá, muestra el dramatismo que ha alcanzado la violencia y el subsecuente desplazamiento. Entre el solo período comprendido entre noviembre de 1994 y mayo de 1995 se han registrado uno de los mayores éxodos en la historia reciente del país. Mas de 20.000 desplazados han llegado a los principales centros urbanos, en situaciones inhumanas, veredas y caseríos enteros han quedado totalmente despoblados. En un solo fin de semana (12 de mayo de 1995), 31 personas fueron asesinadas en 3 municipios de la región ¹.

Una investigación que cobije toda la complejidad del fenómeno del desplazamiento en Antioquia, sería mas que pretencioso bajo las condiciones materiales y de tiempo de esta investigación. Es por eso que proponemos abordar dos aspectos complementarios entre si, y los cuales no han sido explorados en trabajos anteriores. Estos aspectos que llamaremos un estudio de casos sería:

- 1) El impacto de los desplazados de Urabá en el perímetro urbano del Valle de Aburrá, y una aproximación sobre el fenómeno del paramilitarismo en la región y Antioquia.
- 2) El desplazamiento interurbano en la ciudad de Medellín, causado por la acción de las bandas, milicias y organismos de seguridad del Estado.

Este análisis de casos también nos permitirá corroborar o desestimar algunas hipótesis que hemos construido sobre esta problemática en la fase previa de la investigación, según la cual el desplazamiento en Antioquia es un caso sui generis con relación al resto del país. El despla-

zamiento según esta hipótesis en nuestra región tuvo una direccionalidad de las zonas agrarias afectadas por la violencia, hacía las cabeceras municipales o ciudades intermedias de otros departamentos (Córdoba, Choco, Caldas, etc). En este contexto Medellín no aparece como un gran receptor de inmigrantes o desplazados. La razón aunque obvia, es importante subrayarla. Medellín es la ciudad del país que registra el más alto índice de homicidios y hechos violentos y con uno de los cuadros de desempleo mas graves.²

Para un desplazado tomar la decisión de instalarse en Medellín sería algo así como saltar del sartén a las brasas. De otro lado el desplazamiento y la movilidad interurbana por acción de la violencia presenta una tasa exageradamente alta.

² Según los datos de Medicina Legal para 1994, el índice de homicidios fue de 350 por 100.000 habitantes. Para 1993 según un estudio contratado por el Alcalde de Medellín y ejecutado por la Universidad de Eafit arrojó un índice del 14.14% de desempleo. El más alto de las ciudades del país.

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

1. LOS DESPLAZADOS DE ANTIOQUIA EN MEDELLÍN

El desplazamiento de las distintas regiones de Antioquia hacia la capital Medellín ha sido un fenómeno sui generis con relación al resto del país.

Mientras ciudades intermedias, cercanas a las grandes capitales, han sido fuertes centros receptores de migraciones y desplazamientos interregionales (Costa Atlántica, Costa Pacífica, región Cundiboyacense), en la última década el crecimiento de Medellín por la vía de la migración y el desplazamiento no ha sido muy significativo.

Un estudio comparativo sobre patrones de migración de las cuatro principales capitales del país, publicado por FEDESARROLLO en 1993,

con base en la Encuesta Nacional de Hogares de 1992, arrojó que la tasa anual de migración para Medellín en los últimos años fue de un 2.3%, es decir algo más de 30 mil personas. Este dato contrasta para los mismos años con los de ciudades intermedias como Yumbo en el Valle del Cauca y Soledad en Atlántico, con tasas anuales del 6% y 4.3% respectivamente.

Con fundamento en la misma base de datos (ENH 1992), en 1993 el concejo de Medellín contrató un estudio sobre las características del empleo en la ciudad, el cual fue ejecutado por la Universidad EAFIT. Este estudio concluyó que solo 11.247 nuevos trabajadores, bajo la calidad de inmigrantes, se vincularon al mercado laboral en los últimos siete años.

De estos dos estudios podemos hacer dos grandes observaciones.

La primera es que Medellín ya no constituye un centro de atracción de mano de obra y de población, como lo fue en los años 50s y 60s. Esta realidad está afincada sin lugar a dudas en la recesión industrial de los últimos años, y en los escandalosos niveles de violencia urbana que afronta la ciudad en las últimas décadas.

Otra segunda observación, igualmente importante, es que la contribución de los inmigrantes en Medellín a la tasa global del desempleo no es muy significativa (según el mismo estudio de EAFIT esta solo fue de un 0.5% del promedio histórico analizado, que fue del 13.2% en el período 86-92).

A pesar de esto, y de que no existen estudios particulares sobre el comportamiento del empleo dentro del sector de los inmigrantes y desplazados, no es difícil deducir que éste es uno de los sectores más vulnerables para el desempleo, debido a la alta calificación de la mano de obra impuesto por los imperativos de la apertura económica y la baja calificación que aportan los inmigrantes y desplazados que llegan a la ciudad.

— SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

El hecho es que, según las cifras registradas por el estudio reciente de la Conferencia Episcopal sobre el desplazamiento interno por la violencia, la región antioqueña es una de las más afectadas con un subtotal de unos 60 mil desplazados, un 10% del total nacional, sin que esto implique sin embargo que Medellín haya crecido significativamente por vía de la migración. El desplazamiento en Antioquia, tiene como receptores principales las cabeceras municipales de los municipios periféricos de las zonas en conflicto, seguida por otros departamentos vecinos como Córdoba (principalmente en el caso de Urabá), seguidamente de otras ciudades intermedias como las del Viejo Caldas, dejando como última opción a Medellín.

Desde noviembre del año pasado esta lógica parece haber empezado a trastocarse, especialmente por el recrudecimiento de la violencia en la región de Urabá.

CODEHS, la comisión gubernamental sobre los derechos humanos y el desplazamiento, se encuentra haciendo desde el año pasado un estudio de actualización de las cifras presentadas en la investigación del episcopado colombiano sobre el desplazamiento en el país, en las regiones de los Llanos, el sur del país y de Antioquia.

Las primeras impresiones de esta investigación es que la cifra de 60 mil desplazados en la región Antioqueña, no da cuenta de la dimensión del problema, y que esta cifra se puede duplicar fácilmente con los últimos episodios de violencia.

El tema del desplazamiento hacia Medellín debe empezar a reconsiderarse seriamente. Ni a finales de la década de los 80's con la violencia paramilitar en el Magdalena Medio antioqueño, ni con el éxodo que se inició en el Nordeste antioqueño a partir de la masacre de Segovia el 11 de noviembre de 1988, donde murieron 42 personas, Medellín había recibido una oleada tan fuerte de desplazados por la violencia.

2. EL CASO DE URABÁ

José Vicente Peña es el Presidente de Andas, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, una de las pocas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención del desplazado en la ciudad. José Vicente asumió como suyo el caso de los desplazados, pues él mismo sufrió en carne propia los efectos devastadores del desarraigo.

En 1989, siendo Personero en Unguía, en el Urabá Chocoano, fue obligado a salir tras un atentado que lo dejó al borde de la muerte.

En 1992 fue Personero de Remedios Antioquia, por la UP, de donde también tuvo que salir en compañía de otros 30 dirigentes del Nordeste antioqueño igualmente por amenazas.

En compañía de Oscar García organizó Ascodas con desplazados de Urabá y el Nordeste, dicha organización se desintegró tras el asesinato de Oscar en febrero de este año.

Andas se fundó en julio de este año con 28 afiliados. Hoy cuenta con unos 200 socios. José Vicente reconoce sin embargo que ANDAS sólo recoge un pequeño afluente de ese río de gente desplazada que está llegando a Medellín.

De acuerdo a la información suministrada por el programa de reconstrucción en Antioquia, adscrito al despacho del gobernador, por los funcionarios de las administraciones locales de la región de Urabá, el número de desplazados es de 5.705 personas, distribuidos en sus 9 municipios (Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes y San Pedro de Urabá).

Esta cifra de desplazados suministrada por las autoridades departamentales es apenas una pequeña fracción del problema real del desplazamiento. Tal es el caso de Chigorodó por ejemplo, pues en la semana

siguiente al 12 de agosto, fecha de la masacre en Aracatazo, en solo 3 barrios, Bosque, Divino niño y Camilo Torres, salieron 250 familias; en el informe de la gobernación sólo figuran como desplazados en Chigorodó 50 familias, conformadas por unas 374 personas.

Según un estudio reciente sobre los desplazados de la región de Urabá realizado por varias ONGs involucradas en el tema, tales como el Cinep y Justicia y Paz, desde noviembre de 1994 hasta julio de 1995 unas 20 mil personas se habían visto forzadas a salir de Urabá por la violencia. José Vicente estima que de esa cifra, un 10%, es decir unas dos mil personas (500 familias), se encuentran en Medellín.

3. DESPLAZADOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Según funcionarios de la Procuraduría Regional, los municipios del occidente antioqueño como Frontino y Cañasgordas, han sido los principales receptores del grueso de los desplazados, al punto que los alcaldes han declarado un estado de emergencia. El departamento de Córdoba parece ser el segundo destino más importante de las caravanas de desplazados, que según estos mismos funcionarios ha alcanzado niveles dramáticos.

Frente al desplazamiento en el occidente antioqueño podríamos afirmar que la escogencia de estas localidades no se hace al azar. Es motivada principalmente por la proximidad de las regiones.

También existe el factor familiar, pues muchos de los desplazados son oriundos de la región occidental del departamento.

La situación en esta región tiende a agravarse, pues según explican algunos de los burgomaestres de estos municipios, ellos tienen una economía y un presupuesto muy precarios para recibir en condiciones dignas a nuevos inmigrantes.

María Victoria Sanín, alcaldesa de Uramita, comentó al respecto luego de una reunión sostenida el 12 de octubre pasado entre los alcaldes de esas regiones y el gobernador de Antioquia Alvaro Uribe Vélez: «La situación más grave se vive en materia de vivienda, no hay casas para alquilar, ni para comprar, tampoco hay ningún albergue para los desplazados pues para el gobierno central el problema no existe en la región, igual sucede con los locales comerciales. Por esto no es raro encontrar casas de familia donde conviven entre 15 y 25 personas».

Juan Guillermo Arango, secretario de la Personería de Frontino, afirmó: «establecer un censo sobre el número de desplazados que se encuentran en la región es muy difícil, ya que muchos se encuentran en la zona rural, bien sea en fincas de familia, o invadiendo terrenos. El barrio Mungunoma, a 5 minutos del pueblo, es el único lugar donde se puede construir un lote para construir. La mayoría de los desplazados empezaron a llegar luego del 20 de septiembre, tras la masacre en el Bajo del Oso».

Gabriel González, alcalde de Dabeiba, habla sobre la situación del empleo de los desplazados: «nuestras poblaciones ni siquiera han logrado solucionar el problema del empleo para la población nativa. Estos son municipios de vocación agrícola, y por ende las fuentes de empleo se encuentran en el campo. Allí existe el sistema de la parcería, es decir muchas familias ceden a sus hijos tierras para trabajar. De allí que las fincas tengan completo su personal. A nivel de los cascos urbanos la situación es diferente, los que tienen algún capital para establecer un negocio, no encuentran locales comerciales y buscan otra forma de sustento. En Frontino por ejemplo la situación económica ha obligado a la administración municipal a reducir su nómina, con lo cual se aumenta el número de desempleados, que se suman a los de Urabá. A la situación de vivienda y empleo se suman la de salud, ya que no existen planes de contingencia para la región».

Los alcaldes de la región temen que la situación explote y que la guerrilla y los paramilitares también se desplacen de Urabá a canalizar la difícil situación socio-económica de la región.

4. SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS DESPLAZADOS EN MEDELLÍN

4.1. Programa de Reconstrucción en Antioquia:

El comité regional para la atención y prevención de desastres, coordinado por el gerente del programa de reconstrucción en Antioquia, adscrito al despacho del gobernador, viene desarrollando un programa de atención a las familias desplazadas de la región de Urabá, gracias a convenios suscritos entre la Red de Solidaridad Social y el Fondo Nacional de Calamidades.

En julio de este año el programa de Reconstrucción de Antioquia elaboró un informe dando cuenta de su gestión en los diferentes campos de la atención al desplazado (alimentación, droga, enseres, etc.). Según este informe, los recursos transferidos al Comité Regional para la prevención de desastres suman 20 millones de pesos, de los cuales se han gastado lo siguiente:

Necoclí: Para la atención de 150 familias se destinaron 15 millones representados así: 9 millones en alimentos, 2 millones en la compra de 200 colchonetas tipo camping, y 4 millones representados en drogas y toldillos.

San Pedro de Urabá es otro de los municipios afectados por la violencia generalizada, que requirió apoyo por valor de 5 millones de pesos invertidos en alimentos y colchonetas con destino a la atención de 70 familias ubicadas en la zona urbana.

4.2. Andas

El domingo 10 de septiembre Andas realizó la primera asamblea de socios. Allí los asistentes unánimemente consideraron la propuesta de «Plan Retorno», promovido desde 1994 por la Consejería Presidencial para el Urabá, como impracticable: «Hacer esto es como volver a las fauces del lobo», afirma José Vicente, pues hasta ahora la justicia sólo ha operado para juzgar y condenar a dirigentes de la Unión Patriótica, mientras los paramilitares se campean invictos. José Vicente continúa: «Prueba de esto es que de los 200 maestros desplazados sólo 60 se han aventurado a regresar, es por eso que los desplazados de Urabá en Medellín solicitaron en este evento la capacitación en actividades productivas y asociativas, y en ayudas de emergencia por parte del gobierno que les permitan al menos provisionalmente instalarse en Medellín. La situación para ellos es verdaderamente desesperante pues en su mayoría se encuentran hacinados donde amigos y parientes, dándose el caso de casas de familia donde conviven hasta 30 personas, a lo que se suma la condición deplorable en que tienen que salir la mayoría de los desplazados, que reciben una lacónica amenaza sin darles posibilidad al menos de empacar sus pertenencias».

El caso de los desplazados parece verificar el mismo libreto de temas como la inversión social y los derechos humanos, donde todo el mundo parece hablar con propiedad y con preocupación pero son muy pocos los que se comprometen. Instituciones humanitarias como la Cruz Roja, y entidades del gobierno, se han lavado las manos en el tema aduciendo que no tienen recursos para atender la emergencia, José Vicente recuerda: «Lo único que hemos recibido fue un aporte del fondo, de pequeños proyectos para los desplazados, que nos hicieron una erogación de 2 millones de pesos, los cuales se distribuyeron en aportes de cien mil pesos para las 20 familias que atravesaban por la situación más dramática. Los desplazados de Medellín ya empiezan a sentir los primeros síntomas de la desatención, uno de los afiliados a Andas murió recientemente debido a una enfermedad infectocontagiosa, debido en parte a que nosotros no teníamos fondos para sufragar la compra de la droga. La situación tiende a complicarse cada día».

5. EL PAPEL DE LA IGLESIA

El padre Rubén Darío Ospina está a cargo del proyecto de movilidad humana de la pastoral social de Medellín.

El padre Rubén es párroco en el Barrio Santo Domingo Savio desde hace varios años. Optó por el proyecto de la pastoral pues siendo párroco fue testigo de excepción del problema del desplazamiento en este sector de la comuna nororiental.

El padre Rubén Darío comenta:

«En este barrio por las constantes masacres que se han cometido, el desplazamiento tiene el perfil de un éxodo bíblico. Este año por ejemplo, toda la acción comunal del barrio tuvo que marcharse luego del asesinato de dos de los miembros de la junta.

La situación es tal que hasta a los muertos les ha tocado desplazarse. En Santo Domingo de cada 10 muertos que ocurren, 9 son enterrados fuera del barrio por temor a represalias hacia los familiares de la víctima. Generalmente luego del sepelio las familias se marchan definitivamente del barrio.

La peor secuela del desplazamiento es la del desarraigo al interior de la comunidad. La gente va perdiendo su sentido de pertenencia barrial, y los lazos afectivos con el vecindario se van diluyendo, en ese contexto construir organización barrial, y realizar un trabajo pastoral, se hace cada vez más difícil.

A partir de que la pastoral social constató las dimensiones del problema, que fueron reveladas parcialmente a través de la publicación en julio de este año, de la investigación sobre el desplazamiento interno en el país, por parte del episcopado colombiano, nosotros iniciamos una propuesta para emprender una acción evangelizadora sobre aquella población que de una u otra forma está afectada por el problema del desplazamiento, bien sea espontáneo o forzoso.

Desde ese mes la pastoral social de Medellín inició un trabajo sobre el desplazamiento en los siguientes frentes:

- ✓ Prevención
- ✓ Denuncia
- ✓ Acción solidaria
- ✓ El diálogo
- ✓ El retorno al lugar de origen

Algunas de las líneas de acción de la pastoral al respecto son las siguientes: Educación para la acogida, educación para la hospitalidad, capacitación de agentes de la Pastoral para formar e informar. Propiciar encuentros de quienes trabajan con los desplazados. Crear una comisión arquidiocesana de movilidad humana; a la pastoral le donaron una casa, en el barrio Zamora, para adecuarla como casa de paso en la atención al desplazado. Nuestra propuesta es tratar de conseguir una dotación necesaria para ponerla en funcionamiento.

A pesar de las limitaciones económicas de este proyecto, que apenas se está generando, se le ha brindado a los desplazados que han llegado a nosotros, unos 60 hasta ahora, luego de examinar su situación, el valor de los tiquetes para que puedan llegar donde algún familiar o alguna persona que esté dispuesta a recibirlos.

El 17 de septiembre la pastoral de movilidad humana de Medellín realizó la primera jornada dedicada principalmente a la mujer inmigrante; esta celebración tuvo como marco varios encuentros».

El padre Rubén Darío remata diciendo: «El desplazamiento interno en Colombia es un problema inadvertido, inoperante, mal explorado, sin documentación, grave, nacional y sin el tratamiento propio de un problema de derechos humanos».

6. EL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN LA CIUDAD: UNA REALIDAD

Cuantificar en Medellín con alguna exactitud el volumen de personas desplazadas por la violencia interurbana, y aproximarse al impacto socioeconómico de éste sobre la región, es una tarea nada fácil.

Uno de los primeros escollos para abordar esta problemática es que es un fenómeno relativamente reciente, el cual ha venido aparejado con el recrudecimiento de las diferentes expresiones de violencia en la ciudad en la última década, especialmente con la masiva irrupción de grupos ilegales que se reclaman los territorios de la ciudad como si fueran un botín de guerra; tal el caso de los carteles del narcotráfico, bandas juveniles, milicias populares, y ahora sectores de milicias reinsertadas en el caso de Coosercom.

Por otra parte el problema ya crónico, que se remonta a la violencia bipartidista, y que hoy alcanza unos niveles dramáticos del desplazamiento forzoso del campo a la ciudad por la violencia, acapara la atención de los investigadores sociales, los medios de comunicación y los organismos de atención a los desplazados, dejando de lado, la no menos grave situación de los desplazados internos de la ciudad.

La falta de estudios sobre el desplazamiento interurbano ha hecho que las cifras que se divulgan al respecto sean contradictorias. Mientras la investigación de la Conferencia Episcopal estima que existen unos 60 mil desplazados en Antioquia, otras fuentes como la Oficina de Paz y Convivencia, en vocería de Juan Guillermo Sepúlveda, estima que los desplazados en el solo perímetro urbano de Medellín pueden ascender a unos 200 mil.

Francisco Gutiérrez, investigador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Bogotá, quien se encuentra realizando un trabajo de investigación sobre «Resolución de conflictos en medios turbulentos», comenta algunos de los tropiezos en el camino de dilucidar el

desplazamiento interno en Medellín: «En Bogotá un equipo de investigadores franceses se encuentra realizando un trabajo similar sobre el caso de Bogotá, con el asocio de la Universidad de los Andes. Llevan cinco años indagando sobre el problema, y hoy apenas se encuentran en la etapa de formulación».

Sobre el problema específico de Medellín Gutiérrez continúa: «La misma delimitación del tema es bastante complicada. Por ejemplo, hay que diferenciar la movilidad causada por agentes vegetativos, es decir la gente que se va de su lugar de vivienda por razones como el ascenso social, la pauperización de sus ingresos, la expansión familiar y la búsqueda de la independencia, los problemas de la valorización y desvalorización de la propiedad raíz, etc.. De otro lado está el desplazamiento causado por la violencia política, con la mediación de actores armados tales como bandas, milicias, la fuerza pública, los desalojos a las invasiones, etc. Y finalmente está el desplazamiento por causas naturales, tales como avalanchas, inundaciones, etc.».

Otro de los grandes problemas para cuantificar los desplazados internos es la poca confiabilidad de la bases estadísticas; por ejemplo, los resultados del censo de 1994 fueron ampliamente cuestionados incluso por el mismo director del Dane.

A pesar de las dificultades de orden estadístico para cuantificar la movilidad interurbana por razones de violencia, se pueden establecer algunas aproximaciones cualitativas a partir de algunos puntos de referencia. Tal es el caso del movimiento de la propiedad raíz en la ciudad.

Fabio Góez, gerente de la Lonja de propiedad raíz en Medellín, que asocia propietarios, intermediarios, constructores y personas vinculadas al gremio de la compraventa de vivienda, comenta:

«La propiedad raíz adscrita a la Lonja de la ciudad se mueve en los ámbitos de los estratos 4, 5 y 6 fundamentalmente, en algunas pocas

ocasiones el estrato 3, la razón de esto es que en las comunas populares estos negocios por lo bajo de la cuantía y por los graves problemas de inseguridad, se realizan en términos del mercado informal. Por eso nosotros no tenemos registros del movimiento de la propiedad raíz en estos sectores. Sin embargo lo que presumimos es que en estos barrios hay mucha gente vendiendo, y muy pocos compradores, lo que a la final implica que su propietario, después de un largo período de intentar en vano vender su vivienda, opta por rematarla por un precio final que resulta irrisorio. En el estrato 3 sin embargo, en sectores como la parte antigua de la comuna centro-oriental, El Salvador, La Milagrosa, Buenos Aires, o en los márgenes del centro de la ciudad que son estrato 4, San Benito, Prado Centro, hemos asistido a la movilidad casi total de sus propietarios originales y a un creciente fenómeno de la desvalorización de la propiedad. Mientras en sectores como El Poblado, Sabaneta, Envigado, el negocio de la propiedad raíz está en franco crecimiento, donde 1 metro cuadrado oscila entre los 800 mil y el millón de pesos, con una rotación bastante alta de la construcción nueva y la compraventa, en algunos sectores del estrato 3 la propiedad raíz registra un nivel estacionario, con una valoración en algunos casos negativa. Por ejemplo, con 50 millones de pesos se puede comprar un palacete en Prado Centro, con ese mismo dinero, no se consigue un apartamento de dos alcobas en El Poblado o Envigado. Prueba del efecto de la inseguridad de la ciudad sobre el precio de la propiedad raíz, es que hoy 1 metro cuadrado en la ciudad se vende a un 20% menos que el de una propiedad facsímil en Cali, y un 20 o 25% menos que en Bogotá. Lo que pasa en Cali, con la coyuntura del narcotráfico, ha hecho sin embargo que allí se viva un momento desfavorable para este negocio, cayendo a niveles similares a los de Medellín».

Otro indicador que nos permite aproximarnos al menos cualitativamente a las dimensiones del desplazamiento interno en la ciudad, principalmente por razones de violencia urbana, es la tasa de deserción escolar. La interrupción brusca en los estudios de un joven puede significar igualmente un cambio imprevisto del lugar de residencia de su familia, lo que puede ser mediado por algún tipo de amenaza física o psicológica.

En 1993, la investigadora María Eugenia Villa, del Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas de la Facultad de Educación de la U de A, e igualmente investigadora de la Corporación Región, llevó a cabo un estudio comparativo sobre la calidad de la educación en sectores populares de Medellín y Cali. Este es el primer estudio de esta naturaleza en la ciudad que aborda el problema de la deserción escolar.

El estudio en Medellín se realizó en un total de 6 comunas; cuatro de la zona nororiental, una de la zona noroccidental, y la comuna 10 o centro de la ciudad. El trabajo arrojó cifras reveladoras.

En el período 1988-1991, el cual fue tomado como cohorte para el estudio, la deserción escolar en secundaria en algunos barrios de la comuna nororiental como El Popular y Santa Cruz alcanzó niveles del 49% y 60% respectivamente. Esto en palabras castizas significa que uno de cada 2 estudiantes, en algunos barrios populares, abandonan sus estudios antes de culminar el período académico.

María Eugenia intenta dar una explicación a este fenómeno: «Esta altísima tasa de deserción, 3 o 4 veces lo que pasaba en Cali por la misma época, puede ser provocada por muchas circunstancias; el status que la educación ha venido perdiendo como instancia de promoción económica y social, el bajo rendimiento académico, las precarias condiciones económicas de la familia, la falta de estímulo de los padres, pueden coadyuvar a que los jóvenes abandonen sus estudios súbitamente; es más, para una situación de deserción generalmente se confabulan varias de estas situaciones».

Igualmente, en algunos de los talleres que se hicieron con jóvenes desertores y educadores como parte del trabajo de campo en la investigación, algunos testimonios daban cuenta de que el fenómeno de la deserción echaba sus raíces en buena parte en los problemas de violencia de los barrios y el cambio de residencia. Estos son algunos testimonios tomados literalmente de dichos talleres:

Primero el de un niño: «En mi sector la mayoría de los casos de deserción escolar es porque los niños están siendo amenazados y han tenido que cambiar de barrio».

Este es otro testimonio de uno de los Jefes de Núcleo de la comuna nororiental: «La movilidad de los hogares es la causa más frecuente de la deserción escolar. Al principio del año hay una matrícula representativa y a mitad del año pregunta uno por la matrícula real y se asusta. Eso pasa casi siempre porque la gente tuvo que cambiarse a otro sitio, donde fuera más barato vivir, o por la violencia».

Desde el último año en que se realizó el estudio (1991), con la agudización de los conflictos sociales en la ciudad, especialmente por las disputas territoriales entre bandas y milicias, la causa de la violencia como motivo de deserción y desplazamiento ha venido tomando preeminencia sobre las otras causas señaladas por María Eugenia en su estudio. Basta recordar el caso del liceo Gilberto Alzate Avendaño en 1993, donde cerca de una veintena de estudiantes fueron asesinados en sus puertas, lo que provocó un largo cierre y una deserción escolar de más del 60%. En estos momentos el Liceo Ricardo Rendón Bravo de Castilla se encuentra virtualmente paralizado por el asesinato en sus aulas la semana del 15 de septiembre, de uno de los estudiantes.

**DESERCIÓN ESCOLAR DURANTE EL PERÍODO 1988-1991
EN ALGUNAS COMUNAS POPULARES DE MEDELLÍN**

COMUNAS	PRIMARIA (%)	SECUND.(%)
COMUNA 1 : POPULAR	40.6	49.1
COMUNA 2 : SANTA CRUZ	34.9	59.9
COMUNA 3 : MANRIQUE	20.5	40.9
COMUNA 6 : 12 DE OCTUBRE	20.7	53.9
COMUNA 8 : VILLA HERMOSA	38.3	39.8
COMUNA 10: LA CANDELARIA (CENTRO)	13.5	14.6

En las comunas estudiadas el promedio de la deserción escolar encontrado fue del 28.1%, mientras en el resto de la ciudad fue del 20%, lo que da una idea de la generalización del problema a lo largo de la ciudad.

7. AGENTES DEL DESPLAZAMIENTO EN LA CIUDAD

7.1. Agentes Estatales.

7.1.1. POR ACCIÓN:

Según el Banco de Datos de DDHH del Instituto Popular de Capacitación en el primer semestre de 1993, de los 1490 homicidios cometidos en ese lapso de tiempo, y de los cuales se tenía algún indicio sobre su autoría, sólo 170 fueron atribuibles a homicidios políticos o presumiblemente políticos; el resto, unos 1300, estaban tipificados como homicidios «oscuros», es decir, no atribuibles a ningún actor colectivo armado.

Desde entonces esa parece ser la tendencia de la violencia en la ciudad. Los homicidios políticos tienden a rebajar en comparación con la violencia común, que camina a un paso avasallador. Esto no significa que los agentes estatales hayan dejado de ser un factor de violencia en la ciudad y del desplazamiento interno. A los organismos de DDHH y a la Procuraduría continúan llegando denuncias sobre procedimientos irregulares realizados por organismos de seguridad del Estado; a esto se suman operativos presentados como forma legal de reprimir el delito, pero claramente viciados por los grandes vacíos que presenta la legislación vigente como el caso del Código del Menor.

Buena parte de la denuncia contra agentes estatales, y el desplazamiento causado por éstos, provienen de los sectores aledaños a algunas bases militares y de policía, tal es el caso de barrios como París, Santander, y La Maruchenga, en los límites de la zona noroccidental de Mede-

llín y el Municipio de Bello. En estos barrios por ejemplo, la comunidad ha organizado algunas marchas en protesta por la complicidad de miembros de la Base Militar ubicada en el Barrio París con miembros de una banda llamada «Los Tintos Fríos» como táctica para combatir reductos de las Milicias Bolivarianas que operan en el sector. Muchas familias y jóvenes se han visto obligados a abandonar el sector acusados de ser colaboradores de estas milicias. En esta misma zona noroccidental, donde hace casi ya dos años se libra una guerra a muerte entre dos bandas del sector de Castilla, las llamadas «Carruseles» y «Los Lecheros», que ha dejado más de un centenar de jóvenes muertos, así como el éxodo de habitantes del sector, vecinos del sector aseveran que algunos miembros de la Policía han prestado ayuda logística a la banda de «Carruseles», y que hacen parte de un frente de «MAJACA» (Muerte a jaladores de carros), contra «Los Lecheros», que tiene como una de sus principales actividades el robo de carros.

Estas actividades demeritan la imparcialidad de los organismos de seguridad del Estado, piedra angular para mantener su monopolio de la fuerza, que al apoyar grupos ilegales se ponen al mismo nivel de los delincuentes.

7.1.2 POR OMISIÓN (LA IMPUNIDAD)

Del promedio de los 5 mil homicidios anuales que ocurren en la ciudad de Medellín, en los últimos años sólo un 2.5%, según datos de la Fiscalía seccional, terminan en resolución acusatoria contra el presunto homicida. Esto significa que más del 97% de los casos quedan en la más absoluta impunidad.

Se trata pues de un panorama difícil. Los familiares de la víctima al no encontrar una respuesta en la ley optan por tomar justicia por sus propias manos, reproduciendo las cadena de muertes y venganzas, o en la mayoría de los casos las familias de las víctimas se desplazan de sus barrios por temor a retaliaciones.

La impunidad y la ineficiencia del Estado en materia de seguridad se constituye entonces en una causa objetiva del desplazamiento en la ciudad.

8. BANDAS JUVENILES Y DELINCUENCIA

En el área metropolitana de Medellín el ataque de las bandas organizadas de la delincuencia común se ha convertido en la principal causa del desplazamiento intraurbano.

Según información recogida de algunas fuentes de la Fiscalía seccional, en Medellín delitos como la extorsión y el secuestro en menor cuantía han alcanzado unos niveles escandalosos, que han empujado a otras formas delictivas tales como el raponazo o el hurto simple. Existen barrios enteros en Medellín donde todo el comercio del sector está obligado a pagar el impuesto «vacuna» a la banda o al grupo de milicias al mando del sector. Según estas mismas fuentes, ni la población no comerciante se escapa a la «vacuna». «El solo hecho de tener un carro, o de hacer una mejora a la vivienda, es exponer a un vecino a la vacuna de una banda, llegando incluso en algunos casos a que fuerzan a sus propietarios a que les hagan escrituras de sus propiedades», afirma el funcionario de la Fiscalía entrevistado.

Otra de las razones del desplazamiento causada por las bandas juveniles, es cuando éstas entran en conflicto por mantener o extender su territorio, bien por fragmentaciones internas o por la disputa de una nueva plaza de expendio de drogas. En estos barrios las calles y espacios públicos se han convertido en verdaderas trincheras. Ya no sólo se habla del caso de una agresión personalizada, como el caso de la extorsión, sino también por el estado de zozobra que inspira transitar por una calle. Esta situación ha motivado a que muchas personas se desplacen de sus vecindarios no sólo por haber sido víctimas de una agresión directa, sino por un estado psicológico de indefensión, frente al clima de inseguridad que se vive en sus barrios.

Uno de los aspectos importantes con relación a las bandas juveniles es el poderío logístico, que incluye verdaderos arsenales que superan en sofisticación a los que poseen los organismos de seguridad del Estado. Esta proliferación de armas en la ciudad es obra del mercado negro creado por el narcotráfico. Las bandas juveniles son sólo un eslabón más en la cadena delictiva promovida por el narcotráfico y grupos de delincuencia profesional. Según versiones de algunos funcionarios de la Fiscalía, luego de la desarticulación del cartel de Medellín los narcotraficantes asumieron una política de libre mercado, aumentando su capacidad de contratación sobre las bandas y ampliando el mercado interno de la droga (prueba de ello es que la confiscación de cocaína y heroína en la ciudad éste año es incluso más grande que en la época de Pablo Escobar).

El narcotráfico no sólo ha provocado una contrarreforma agraria sino también urbana. Hoy en día diversos barrios, como en el caso de las tierras, la propiedad se valoriza o desvaloriza de acuerdo a los intereses de estos sectores. Algunas bandas de la ciudad han repoblado algunos barrios al mismo ritmo que los paramilitares pueblan algunas zonas rurales, incluso a algunas de las bandas se han articulado algunos grupos paramilitares como «MAJACA», «COLSINGUE», y bandas al servicio de Fidel Castaño y el Cartel de Cali; al menos así lo afirman los grupos paramilitares en un documento promulgado a principios de este año luego de una cumbre efectuada en el departamento de Córdoba.

Las bandas juveniles en la ciudad (con una alta proporción de participación de menores de edad), son un fenómeno en franco crecimiento. La Fiscalía seccional de Medellín tiene en sus archivos la lista de cerca de un centenar de bandas; si a ésta se suman las que poseen otros organismos de seguridad como la Policía, el Das, y más las que aún no han sido detectadas, este número se podría perfectamente triplicar. Es triste verificar esta realidad, pero en Medellín hay más bandas delictuales que grupos juveniles o pastorales.

9. MILICIAS POPULARES

Las milicias también han sido factores del desplazamiento en la ciudad ya que uno de sus propósitos primordiales es el del desalojo de bandas y delincuentes en sus zonas de influencia, aunque no en pocas ocasiones se ha denunciado los abusos de éstas contra las comunidades y contra líderes cívicos que no han compartido algunos procedimientos y políticas de estos grupos.

La situación con las milicias se ha complicado en últimos tres años con las constantes fragmentaciones al interior de esos grupos, y las prácticas delincuenciales de algunas. Según un estimativo de los organismos de seguridad del Estado, en Medellín operan alrededor de unos 30 diferentes grupos milicianos, de los cuales solo unos cuantos actúan bajo la orientación de la guerrilla o grupos políticos.

Dentro de los desplazados por las milicias de los barrios populares no solamente se encuentran presuntos delincuentes, sino sus familias que en muchos casos son hostigados, dirigentes de los partidos políticos tradicionales, presuntos «sapos» o infiltrados, miembros de la fuerza pública y personas que han disentido con la forma de operar de estos grupos.

El índice que más pone de evidencia el tipo de operaciones llevadas a cabo por las milicias, en cuanto al desplazamiento de grupos humanos de los barrios populares, es el creciente deterioro del centro de la ciudad.

Según fuentes de la Fiscalía regional, la banda más numerosa que opera en la ciudad, en concreto en el centro de la ciudad, es la llamada «Los muelones», que opera entre el Parque Berrío y Parque Bolívar, que según estimativos de esta misma fuente hace unos cinco años sólo contaba con unos pocos miembros dedicados al raponazo, y hoy cuenta con cerca de un centenar de miembros, que incursionan en todas las modalidades delictivas, y en su mayoría son delincuentes que han sido despla-

zados de los barrios populares por las milicias.

Como consecuencia de los niveles de inseguridad que se viven en el centro de la ciudad (la zona 10 es la que resiste la más alta tasa de homicidios en la ciudad), el precio de la propiedad raíz ha decaído significativamente. Según el doctor Fabio Goez, de la Lonja de Medellín, el centro de la ciudad es una de las zonas de más baja valorización. Así por ejemplo, 1 metro cuadrado en el corazón del centro, (Junín con la playa), no alcanza siquiera una tercera parte del valor de ese mismo metro cuadrado en El Poblado o Laureles.

10. LAS MILICIAS REINSERTADAS

Desde el 26 de mayo de 1994, como consecuencia de los pactos de paz entre algunos grupos de milicias y el gobierno, nacería Coosercom (Cooperativa de Servicios Comunitarios).

Si bien este proceso fue mirado con gran expectativa por la ciudadanía en un principio, como un aporte a la seguridad y a la convivencia en los barrios populares de la comuna nororiental donde operan, hoy algunos sectores de esta cooperativa son una fuente de inseguridad y de desplazamiento en amplios sectores de la comuna nororiental.

Según el contrato suscrito entre los reinsertados de las milicias, y Metroseguridad como la parte contratante, a Coosercom se le asignaban 6 sedes que operarían en 32 barrios de la ciudad.

Las denuncias más graves contra miembros de Coosercom es por el desplazamiento humano que han generado, especialmente en los barrios de ladera de la comuna nororiental, precisamente aquellos sitios donde el acceso a la fuerza pública se le hace más difícil.

Don Héctor Londoño ha sido líder de varios de estos barrios desde su fundación. Don Héctor personalmente ha sido víctima de la intoleran-

cia por parte de miembros de Coosercom, al punto que fue obligado a abandonar su residencia, la cual posteriormente fue objeto de una «apropiación» por parte de esa organización. Don Héctor ha entablado la denuncia respectiva ante la Procuraduría regional y La Defensoría del Pueblo, sin que hasta ahora haya recibido una respuesta favorable.

Don Héctor relata brevemente cuándo empezaron los padecimientos de esta comunidad de la zona nororiental, conformada por unos 14 barrios de la llamada zona del Limbo.

«Estos barrios comenzaron a ser poblados especialmente a partir de 1975. La mayoría de la gente venía de municipios como Ituango, Sopetrán, Santa Rosa, Urabá y otros, algunos venían huyendo de la violencia, aunque la mayoría venían huyendo de la pobreza de sus sitios de origen. Acá también llegaron gentes de otros barrios de Medellín que vieron la posibilidad de construir una casa propia.

Como todos estos barrios eran de invasión, carecían de los más mínimos servicios e infraestructura social. A partir de 1985 empezamos a surgir un grupo de dirigentes que promovíamos la integración y buscábamos unas condiciones físicas dignas para estos barrios. Las dos principales metas nuestras llegaron a ser la del desmonte de los decretos 15 de 1985 y el acuerdo 54 de 1987 de la administración municipal, los cuales bajo el pretexto de declarar el lugar zona de riesgo, excluían estas laderas del casco urbano de Medellín, negando de plano cualquier posibilidad de incluirnos en los planes de desarrollo e inversión social del Municipio de Medellín. La otra meta que nos fijamos era la de dotar a la zona de servicios públicos.

A diferencia de otros barrios de la comuna nororiental, esta no fue una zona muy azotada por la delincuencia; sin embargo otros fenómenos peores empezaron a cuajarse en la zona. Cuando la lucha por los servicios públicos empezó a alcanzar su pico más alto, en 1991, militarizaron los barrios, y algunos miembros de la fuerza pública se aliaron con parami-

litares que vinieron a poblar el barrio desde el Magdalena Medio y Urabá. Estos grupos en el lapso de dos años asesinaron unas 200 personas, muchos de ellos dirigentes cívicos, y provocaron el primer éxodo masivo de cientos de pobladores.

El acoso a que fue sometido la comunidad, no terminó allí. En 1990 habían aparecido las primeras milicias en el barrio que se llamaban «las 6 y 7 de noviembre». Aparecieron discretamente, pero para 1993 estas milicias organizarían una campaña de expansión territorial tratando de doblegar de paso el movimiento cívico de los barrios a su voluntad, es por esta razón que iniciaron algunas actividades como el robo de recibos de los servicios públicos y atentados contra algunos bienes de las empresas públicas.

Por este mismo año empezaron las disputas territoriales de estas milicias con otras que se llamaban «del pueblo y para el pueblo». Si bien estos grupos asesinan muchos de los paramilitares que habían llegado al barrio, ponen al movimiento cívico entre la espada y la pared, y les empiezan a exigir militancia política. En ese año continuaron los asesinatos de dirigentes cívicos, esta vez las agresiones hacían parte de la disputa territorial que libraban esos dos grupos de milicias. Por ese entonces fueron asesinados Oliver Suárez, presidente de la Acción Comunal del barrio Carambolas, una de las primeras personas en impulsar la llegada del transporte público hasta los barrios más remotos de la comunidad; también fue asesinado Jesús García, presidente de la Acción Comunal del barrio La Esperanza, fruto de estos enfrentamientos y agresiones de parte de algunos grupos de milicias. Otro grupo grande de gente se vio forzado a salir del barrio.

Desde que se iniciaron los diálogos gobierno-Milicias en 1994, los líderes de estos barrios y la comunidad vieron una luz de esperanza que se colaba por la ventana de los pactos de paz.

De esta forma empezamos a participar en una de las mesas de trabajo formada en el barrio Granizal, la cual estaba concebida como un espacio de concertación de propuestas de inversión social con el Estado, así como para la conformación de un nuevo movimiento político de los líderes de la comuna. Por falta de iniciativa política de los reinsertados de las milicias, y por los conflictos internos que estos cazaron, esta mesa se fue resquebrajando, hasta que finalmente desapareció.

Desde entonces **COOSERCOM** empezó a reforzar más las posiciones militaristas, dedicándose exclusivamente al patrullaje armado de los barrios y olvidándose de las funciones de servicio social cívico que tenían estipuladas. La relación Coosercom comunidad empezó en un franco proceso de deterioro. Cuando se realizaron las elecciones para el concejo de Medellín en octubre de 1994, ante esta pérdida de credibilidad en los reinsertados, algunos de sus miembros iniciaron una campaña de proselitismo armado sobre los líderes y su comunidad para que votaran por los candidatos de esa organización.

El 11 de noviembre de ese mismo año en el Inem de Santo Domingo se citó un evento entre líderes de la comunidad y Coosercom, para hacer un nuevo pacto de respeto hacia la comunidad. En un ambiente de intemperancia, como el que se ha cocinado en tantos años de guerra de la comuna nororiental, ese acto de buenas intenciones fue interpretado como un acto de desafío hacia Coosercom, lo que ha redundado en otra oleada de violencia y violación de los derechos humanos contra la comunidad. No solamente yo me tuve que ir del barrio, sino decenas de familias. Solamente en este año han sido asesinados 8 líderes comunales, presuntamente a manos de Coosercom. La ceguera de los dirigentes de esta organización llegó a tal punto que hace unos meses asesinaron a Alex Aguirre, miembro de la junta directiva de Coosercom, que estaba intentando un proceso de negociación para poner fin a las guerras fratricidas de esa organización y a las agresiones contra la comunidad. Las familias que nos tuvimos que desplazar del barrio (unas 80), hemos conformado una asociación para buscar salidas de empleo y de reubicación ante las instancias locales y nacionales del gobierno.

Primero con los paramilitares, después con las milicias y ahora con Coosercom, nada ha cambiado para nosotros, pues perdimos lo último que teníamos que era un techo propio».

11. LA REUBICACIÓN

Uno de los principales problemas de los desplazados en Medellín tiene que ver con su ubicación.

Varios casos de estos se pueden constatar en el barrio El Limonar, barrio ubicado en el suroccidente del área metropolitana de Medellín, donde de acuerdo con datos suministrados por el programa de Naciones Unidas para el desarrollo, de una manera descoordinada se ha concentrado la pobreza de la ciudad en 2.880 soluciones de vivienda. Al Limonar han sido llevadas las víctimas de la violencia política; viudas y familiares de activistas de la Unión Patriótica con sus hijos, las víctimas de las tragedias naturales de los barrios La Igua y Villatina, y así mismo se está negociando con los habitantes del barrio Santa Cruz en Itagüí afectados por la construcción del tren metropolitano, su reubicación en el Limonar.

Es importante resaltar que a la luz de hoy es la única oferta concreta para que algunas personas desplazadas accedan a una solución de vivienda, aunque la magnitud del problema rebasa con creces las soluciones. En Villatina por ejemplo, al centrooriente de Medellín, en el año anterior fueron desalojadas unas 80 familias por habitar en zonas de alto riesgo; hasta marzo de este año ya se había hecho efectivo el desalojo de 25 familias, de las cuales sólo 15 podían pagar una cuota en el Limonar.

Al margen del problema de vivienda están de por medio otros agravantes como problemas de salud, empleo, educación y principalmente de violencia. A los desplazados ningún tipo de institución en la ciudad les está brindando asistencia psicosocial, lo que a la postre alimenta el ciclo de la violencia urbana. Hoy por ejemplo El Limonar es un

barrio azotado no sólo por el flagelo de las bandas juveniles, sino de las milicias populares, que se han replicado del lugar de origen de los desplazados.

12. EL PROBLEMA DE LAS INVASIONES Y LOS DESALOJOS

Medellín, con cerca de 1 millón 700 mil habitantes, posee 74 asentamientos subnormales donde el desplazamiento es constante. El 50% de éstos se encuentra en zonas de alto riesgo, donde habitan cerca de 45.000 familias conformadas por unas 200.000 personas. Con las invasiones el problema se traslada de un lado a otro de la ciudad.

12.1. Invasiones en el Valle de Aburrá en los últimos meses:

Desalojo en la carrera 52 entre calles 100 y 106, afectadas más de 100 personas. La diligencia se realizó por orden de la Inspección Segunda de Permanencia. Es de anotar que esta diligencia hubo de realizarse nuevamente los días 2, 3 y 4 de octubre del presente año. En esa ocasión por orden del Inspector Segundo Municipal de Policía.

En agosto 17 de 1995 fueron desalojadas más de 120 personas en el sector del barrio El Jardín. Este procedimiento fue ordenado por la Inspección 3A municipal de Policía. A los pocos días hubo necesidad de realizarse nuevamente por la reincidencia de las personas invasoras.

Por orden de la Inspección 6B del barrio Kennedy se llevó a cabo el desalojo de más de 80 personas del sector conocido como «Barrio Antonio Galán». Esto fue en mayo 17 de 1995.

En el barrio Robledo, por orden de la Inspección 6B se realizó la restitución de un bien de uso público el 26 de julio del presente año, donde aparece involucrada una sola persona.

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

De la Inspección 13B Municipal de Policía, donde se da a conocer una diligencia de desalojo para el día 5 de octubre en el barrio San Javier, calle 39 B con carrera 115, escuela Pedro J. Gómez.

11 de Octubre de 1995 en la Inspección de San Gabriel Municipio de Itagüí se hizo el lanzamiento de 20 familias ubicadas en las márgenes de la quebrada La María de ese municipio.

NOTAS:

1. Es importante recalcar como una misma invasión luego de un desalojo, se vuelve a hacer hasta 3 y 4 veces en un solo año, en el mismo lote o en un lote contiguo, tal es el caso del Barrio Niza, donde los mismos invasores han invadido la curva del diablo, y Moravia sobre la margen oriental del río Medellín.
2. Según funcionarios de la oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría Regional, al menos un 20% de los invasores son reincidentes, es decir, se han detectado a lo largo de las diferentes invasiones de la ciudad, lo que según estos funcionarios puede ser indicativo de la existencia de una agremiación de invasores piratas, con ánimo netamente comercial.
3. El grueso de las familias invasoras sin embargo hacen parte de la larga lista de desplazados internos de la ciudad por la violencia de los barrios populares, Según estos mismos funcionario de la Procuraduría es casi nula la participación de desplazados de la violencia de Urabá, Córdoba, o el resto del departamento de Antioquia en los procesos de invasión reciente; una de las causas de esto según estas mismas fuentes, es el estado de intimidación, terror psicológico y aislamiento en que llegan los desplazados de fuera de Medellín.

La situación de los invasores es sumamente delicada ya que buena parte son fruto de la violencia de la ciudad, y a la vez se les responde con violencia.

La Defensoría del pueblo manifestó que esta institución solamente mediaba entre el proceso de expulsión y adjudicación de vivienda.

Por otra parte, los abogados asesores de la Personería han manifestado desconocer el fenómeno expresando que su única relación con el asunto era la de estar presentes en los momentos de desalojo, «para asegurar el cumplimiento de la ley».

13. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, QUE CAPTAN RECURSOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA ATENCIÓN AL DESPLAZADO

- Conferencia Episcopal
- Cinep.
- Comisión Andina de Juristas.
- Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (ILSA).
- Consejería de Proyectos para Refugiados Latinoamericanos.
- Brigadas Internacionales de Paz.
- Corporación Apoyo a Víctimas de la Violencia Sociopolítica Pro Recuperación Emocional (AVRE).
- Corporación Revivir (Sucre y Córdoba).
- Corporación María Cano (Sucre y Córdoba).
- Reiniciar (Sucre y Córdoba).
- BENPOSTA (Organismo español que atiende niños desplazados).
- Corporación Betanci (Córdoba).
- Hermanas Vicentinas (Córdoba y Sucre).
- Comité Regional de Derechos Humanos Magdalena Medio (CREDDOS).
- Albergue campesino (Magdalena Medio).
- Organización Femenina Popular.
- Asociación Carare.
- Grupo participativo de Mujeres en situación de desplazamiento. (Bogotá).

14. CRONOLOGÍA DEL DESPLAZAMIENTO EN ANTIOQUIA

Hasta la década del 50, cuando Colombia empezó a ser estremecida por violencia bipartidista, Antioquia vivió un fuerte proceso de migración (hacia adentro y hacia afuera del departamento) inducido por «causas espontáneas», entendidas éstas como la búsqueda de nichos geográficos y ecológicos más promisorios, o simplemente por la atracción ejercida por el enriquecimiento rápido, tal como la fiebre del oro como fue vivida en el Oeste norteamericano o en el Norte de Canadá, la cual tuvo su versión maizera en el Nordeste antioqueño y Bajo Cauca.

Algunas de las corrientes migratorias más fuertes de finales del siglo pasado y principios del presente, fueron:

- a. Desde el departamento del Chocó a Urabá y el bajo Cauca.
- b. Desde Suroeste y el Oriente del departamento hacia Medellín y el Viejo Caldas (la llamada colonización antioqueña).
- c. De las otras regiones de Antioquia hacia Medellín.

Todos estos flujos migratorios hacia adentro y hacia afuera del departamento tenían un punto de convergencia: Medellín, bien como sitio de paso o como destino final.

Es de esta manera como desde principios del siglo en la ciudad se erigió el sitio del sector de Guayaquil, atiborrado de hospedajes, bares, la estación del ferrocarril, las terminales de despacho de las empresas de transporte terrestre municipal y nacional, y por supuesto que con un activo centro del comercio y acopio de víveres. A Guayaquil se le llamó entonces el primer puerto seco de Colombia, sólo comparable en América Latina con el Boca en Argentina o El Bronx en Nueva York.

Estos primeros inmigrantes tenían algunas ventajas relativas sobre los actuales; disponían de un tiempo prudencial para vender sus tierras y enseres, planificando así su arribo al sitio de recepción. Estos sitios de

recepción generalmente gozaban de una situación de bonanza, producción aurífera, industrialización (caso de Medellín), bonanza cafetera (El viejo Caldas), etc..

Con la irrupción de la violencia en los años 50s, la situación para los inmigrantes cambia bruscamente. Surgen las primeras guerrillas liberales y los primeros grupos parapoliciales (la policía chulavita), orientada por el partido conservador. Se calcula que entre 1948 y 1957 perdieron la vida unas 200 mil personas en el país.

La región antioqueña si bien no fue una de las más afectadas del país, aportó una gran cuota de vidas humanas en esta guerra.

En Colombia y en Antioquia luego de esta guerra civil el mapa social y político adquirió una nueva configuración:

a. Los grupos armados vinculados a los partidos liberal y comunista fueron empujados hacia zonas remotas.

b. Se vivió una contrarreforma agraria de corte reaccionaria, una pequeña élite terrateniente, se apoderó de las mejores tierras.

c. Se inicia formalmente el desplazamiento por la violencia en todas sus connotaciones.

Como se mencionaba anteriormente, en este conflicto con una mediana intensidad, focalizado en regiones como el Suroeste antioqueño y el Nordeste con las guerrillas del Capitán Franco; los flujos migratorios en Antioquia continuaban siendo predominantemente espontáneos, buscando mejores condiciones económicas.

Durante los 60s y los 70s esta lógica pareció mantener una línea de continuidad, o al menos así lo han revelado las investigaciones de campo que se han realizado en la ciudad con los habitantes de las zonas de invasión de esta época. La mayor parte de las entrevistas realizadas si-

túan la causa de la inmigración en un factor principal: la pobreza y el aislamiento de los habitantes de la mayor parte de las regiones antioqueñas, que fueron condenadas al atraso por un modelo industrial y monoexportador fuertemente dependiente.

En esas dos décadas la guerrilla solo llegó a ser un fenómeno marginal en Antioquia. Las Farc sólo lograron asentarse en algunos municipios del Magdalena Medio antioqueño, mientras las nuevas guerrillas revolucionarias, el Epl y el Eln, sólo contaban con pequeños focos armados que no representaron una amenaza real para el establecimiento y que fueron diezmados bien por la fuerza pública como en el caso del Eln en el municipio de Anorí en el Nordeste Antioqueño (1972-73), o por las divisiones y contradicciones internas como en el caso del Epl.

La violencia política en Antioquia como un fenómeno de dimensiones de catástrofe social y en una espiral ascendente, empieza a dibujarse en la década del 80.

Son varias de las circunstancias que se confabulan para este nuevo fenómeno:

a. Aprovechando la fragilidad del control estatal en muchas regiones del departamento, y el resurgir del movimiento cívico y gremial en los sectores populares (Anuc, Cut, Movimiento Estudiantil, etc.), la guerrilla se hace fuerte, convirtiéndose en algunos casos en autoridad local. El Eln, por ejemplo, que hasta 1980 no contaba en toda la región con más de cien miembros, para esta década multiplicó por diez sus efectivos y su número de frentes. El secuestro y extorsión sobre las personas acaudaladas se convierte en la principal fuente de ingreso para la guerrilla, y en la columna dorsal para su crecimiento logístico.

b. El Estado colombiano a su turno adoptó como estrategia para frenar el avance de la insurgencia no las políticas sociales, sino las políticas de «seguridad nacional» emanadas de los EU, bajo el axioma de que existe un enemigo interno que hay que combatir, el cual no solamente está representado en la guerrilla sino en la población civil que se encuentra en medio del conflicto. Bajo

DESPLAZADOS INTERNOS EN ANTIOQUIA

esta égida, de los últimos 15 años, 13 han estado regidos por la legislación de los estados de excepción, facilitando la instauración de un Estado que ha auspiciado todo tipo de violación de los derechos humanos contra la población civil.

c. En la década de los 80 el narcotráfico tomó como sede de operaciones a nivel internacional la región antioqueña, la que se levantó como centro de comercialización, procesamiento, cultivos y el blanqueo de dólares, lo que dio origen a unas nuevas regulaciones económicas, sociales y militares. Aparece el fenómeno de la compra de tierra por los narcos que buscan controlar vastas regiones, y el fenómeno del paramilitarismo y el sicariato como instrumento para garantizar el funcionamiento de toda la organización del narcotráfico.

El entrecruzamiento de estas tres violencias en la región antioqueña sería el cordón detonante de una oleada sin precedentes de violencia y desplazamiento forzoso. Con la aparición de la modalidad de la masacre y las agresiones paramilitares aparecieron también las grandes masas humanas trashumantes que buscan huir de este conflicto.

Aquí algunas fechas relevantes que han marcado el desplazamiento forzoso en la región antioqueña:

- ☠ Febrero de 1982, el MAS se constituye en una organización paramilitar nacional al servicio del narcotráfico, Antioquia se convierte en su centro de operaciones.
- ☠ Junio de 1983, el entonces Procurador General Carlos Jiménez Gómez, reveló una lista de 59 militares comprometidos en la conformación del MAS, así como reveló sus tres principales financiadores, Carlos Ledher, Pablo Escobar y el clan conformado por la familia Ochoa.
- ☠ Julio de 1983, el MAS ejecuta su primera masacre en el Municipio de Segovia Antioquia.

— SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

- ☠ 3 de marzo de 1985, en el Bagre, municipio antioqueño, tras un paro cívico de 8 días en busca de reivindicaciones sociales y económicas para la población, fueron masacradas por el ejército 8 personas, y 15 fueron heridas.
- ☠ 27 de Abril de 1985 el gobernador de Antioquia en una visita a Urabá reconoce que los logros por la paz son mínimos, y que las guerrillas del Epl y las Farc han extendido su control político y militar sobre la zona.
- ☠ 4 de Mayo de 1985: buena parte de los sindicalistas de «A Luchar» y otros movimiento de izquierda de Itagüí, municipio vecino de Medellín, se ven forzados a abandonar sus casas con sus familias tras una serie de asesinatos y amenazas originadas en grupos de narcotraficantes en cabeza de la familia Galeano.
- ☠ En el mes de mayo de 1985, se instalan los campamentos de paz del M19 y El Epl en Medellín, quienes reclutan y capacitan algunos miembros de bandas delincuenciales juveniles que más tarde se convertirían en el terror de las comunidades, muchas familias se ven forzadas a salir de sus barrios. Otras bandas delincuenciales como Los Priscos en Aranjuez, ligadas al narcotráfico, también obligan a salir a muchos de sus habitantes.
- ☠ 28 de Mayo de 1985, la Unión Patriótica lanza su plataforma política en Bogotá, reintegra a la vida civil miembros y simpatizantes de las Farc. Esta organización política rápidamente cobra fuerza en el Nordeste y en el Magdalena Medio antioqueño.
- ☠ 31 de Julio de 1985, una bomba hace explosión en la sede central del Partido Comunista en Medellín. Desde ese momento se inicia una ola de atentados y de asesinatos contra sindicalistas y simpatizantes de la UP en Antioquia.

DESPLAZADOS INTERNOS EN ANTIOQUIA



8 de Octubre de 1985. Sale a la luz pública un informe de Amnistía Internacional sobre Colombia; el informe acoge las denuncias formuladas por el procurador Carlos Jiménez Gómez sobre el MAS, también denuncia que el número de ejecuciones extrajudiciales en la región del Magdalena Medio aumentaron drásticamente, tal es el caso del Nordeste antioqueño luego de la creación de la brigada N° 13 con sede en Puerto Berrio; en las operaciones de contrainsurgencia contra las Farc cometieron asesinatos contra la población civil y provocaron un éxodo masivo de sus pobladores. El informe también denuncia una alianza entre el MAS y los militares para despejar el camino del control de los narcotraficantes sobre el Magdalena Medio. En los que iba corrido de 1985 fueron asesinadas 20 personas entre líderes cívicos y sindicales.



9 de diciembre de 1985. La situación de Urabá empieza a tomar ribetes de guerra civil. Sintragro (Sindicato que agrupa parte de los trabajadores bananeros), denunció que el 20 de noviembre un grupo de hombres encapuchados atacó a unos cien trabajadores que estaban recibiendo un cursillo sindical, el ataque dejó 5 muertos y 15 heridos. Ese mismo mes fueron asesinados unos 20 trabajadores bananeros. Sintragro acusó al ejército y al entonces Ministro de Gobierno Jaime Castro como instigador de esos asesinatos, pues se cometieron tras acusaciones por parte de éstos de «infiltración de la guerrilla en los sindicatos».



Febrero 1 de 1986. En el Bagre es amenazado todo el Comité de Derechos Humanos y tienen que salir de la región. En Remedios 200 mineros son despedidos de su trabajo y amenazados.



Marzo 16 de 1986. Bombardeos y ametrallamiento de casas en Cuturú, Cauca, al menos 50 familias se ven forzadas a salir de sus parcelas.



9 de Marzo de 1987. En Machuga, Segovia se producen bombardeos a la población civil con el consecuente desplazamiento de sus pobladores.

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

- ☠ 10 de marzo de 1987. La UP denuncia una ola de asesinatos selectivos contra esa organización en el Nordeste antioqueño.
- ☠ 1º de Mayo de 1987. Se inician las que fueran llamadas «marchas campesinas de mayo» en todo el Nororiente del país y en Antioquia. Se inicia una ola de atentados, los paramilitares contra la población civil, y de la guerrilla «en señal de respaldo de la marcha». Se producen bombardeos del ejército en las zonas donde se realizan estas marchas. La mayor parte de los dirigentes de las marchas tienen que pasar a la clandestinidad o son víctimas del desplazamiento.
- ☠ 2 de Agosto de 1987. Discusión jurídica y política en el gabinete del presidente Barco sobre la legalización de las autodefensas y paramilitares, sus principales partidarios son el Ministro de Defensa Rafael Samudio Molina y de Justicia Manuel Arias Carrizosa.
- ☠ 26 de Agosto de 1987. La guerra sucia, iniciada por la alianza entre narcotraficantes y sectores del ejército, llega a su punto más alto en la ciudad de Medellín con el asesinato del Presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, Héctor Abad Gómez, y el también activista de esa organización, el catedrático de la Universidad de Antioquia Leonardo Betancur. La racha de asesinatos continúa con el presidente de Adida Felipe Vélez, y otras personalidades democráticas. Aparecen en la región de Antioquia y en el país listas negras de personalidades democráticas e intelectuales, con ideas de izquierda, la mayoría de estas personas tienen asilo político en el exterior.
- ☠ 5 de Septiembre de 1987, el ministro de Justicia Manuel Arias Carrizosa niega la existencia de «la guerra sucia» y afirma que los crímenes en Medellín son obra del narcotráfico en contra de la extradición y para desestabilizar las instituciones.

DESPLAZADOS INTERNOS EN ANTIOQUIA

- ☠ 8 de Septiembre de 1987. Parálisis general de 48 horas en la zona bananera de Urabá luego de la muerte de un trabajador de Sintrabanano.
- ☠ 13 de Septiembre de 1987. El comandante de la X Brigada, con sede en Urabá, Manuel San Miguel señaló el sindicalismo de la región como brazo armado de la guerrilla.
- ☠ 20 de Septiembre de 1987. Masacre de cuatro miembros de una familia en Apartadó, todos militantes de la UP.
- ☠ 24 de Septiembre de 1987. Otra masacre en Urabá, esta vez en Turbo, tres trabajadores y un administrador de una finca. Esta semana fueron asesinadas doce personas.
- ☠ 1º de Octubre de 1987, el DAS elaboró una lista de 128 grupos paramilitares en Colombia. De estos funcionan en Antioquia: el Comité Estudiantil Unión Revolucionaria, Escuadrón de la Muerte, Falange, Grupo Obrero Revolucionario, Los Yumbos, Muerte a Rateros (MAR), Los Priscos, Muerte a Homosexuales, Muerte a jibaros y basuqueros, El MRN, Limpieza Total, Amor por Medellín y Mano Negra.
- ☠ 15 de Octubre de 1987. Renuncia la Alcaldesa de Apartadó, Lucía López, por amenazas de muerte, sale del país con su esposo, el luego candidato presidencial Bernardo Jaramillo Osa.
- ☠ 5 de Noviembre de 1987. Luego de la muerte del candidato presidencial Jaime Pardo Leal, la UP anuncia que desde mayo de 1985, cuando se creó esa organización habían sido asesinados 550 miembros, buena parte de ellos en la región antioqueña.

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

☠ 25 de Noviembre de 1987. Masacraron 5 militantes de la Joco en la sede de Medellín.

☠ 1º de Diciembre de 1987. En Cáceres, bombardeos y desalojos del ejército contra los barequeros, la mayoría de los desplazados emigraron a Córdoba.

☠ Enero de 1988. Este se convierte en uno de los hechos más violentos en la región antioqueña. Explota el primer carrobomba en el edificio Mónico de Medellín, se produce una ola de secuestros y asesinatos en la ciudad atribuidos al narcotráfico.

☠ Enero y Febrero de 1988. El ejército detiene varios líderes cívicos de Zaragoza y realiza bombardeos, al menos 150 desplazados son obligados a salir.

☠ 1º de Marzo de 1988. Paro laboral en Cementos Nare, en el Magdalena Medio Antioqueño, tras completarse el asesinato de 14 obreros de esa empresa a manos de paramilitares en los últimos meses.

☠ 5 de Marzo de 1988. Masacrados en la finca Honduras y La Negra, en Currulao y Chigorodó, 26 obreros bananeros.

☠ 12 de Abril de 1988. Otra nueva matanza en Urabá, en Nueva Colonia, Turbo, son secuestrados 23 campesinos que luego aparecen muertos.

☠ 15 de Abril de 1988. Masacrados otros cuatro campesinos en Urabá. Se acusa de estas masacres al exalcalde de Puerto Boyacá Luis Rubio, al empresario de Unibán Mario Zuluaga, al Mayor Becerra Jefe de Inteligencia Militar del Batallón Voltigeros, al Capitán Mendieta de la Policía, y a otros militares, todos con auto de detención por los Juzgados 2 y 3 de Orden Público de Bogotá.

DESPLAZADOS INTERNOS EN ANTIOQUIA

☠ 17 de Mayo de 1988. Asesinado en Medellín el alcalde de Remedios de la UP.

☠ 28 de Agosto de 1988. Condenados 6 de los 11 miembros de la banda Los Nachos en Medellín, acusados de asesinar más de un centenar de personas y el desplazamiento de un número indeterminado de habitantes de los barrios populares de la Comuna Nororiental.

☠ 11 de Noviembre de 1988. Se produce la mayor masacre registrada en la historia del país, 53 pobladores son asesinados en la plaza Municipal de Segovia. Se acusa de esta masacre a la base militar del ejército asentada en la región, los paramilitares del Magdalena medio al mando de Henry de Jesús Pérez, y al MRN (Muerte a revolucionarios del Nordeste). Quedan 50 personas heridas. Y se provoca un éxodo masivo de sus pobladores, principalmente hacia Medellín.

☠ Marzo 3 de 1989. Bombardeos del ejército en Zaragoza.

☠ Marzo 22 de 1989. En Zaragoza bombardeos indiscriminados contra la población civil por parte del ejército.

☠ 18 de Agosto de 1989, en la región de los Arrepentidos de El Bagre, bombardeos por parte del ejército.

☠ Septiembre 18 de 1989. Bombardeos en El Bagre.

☠ Septiembre 24 de 1989. En Campo Alegre, El Bagre, bombardeos a la población civil.

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

- ☠ Septiembre 29 de 1989. En la Vereda Santa Villa de El Bagre, bombardeos.
- ☠ Octubre 4 de 1989. En Pató, Zaragoza bombardeos.
- ☠ Octubre 20 de 1989. Bombardeos y ametrallamientos en Fraguas, Segovia.
- ☠ Octubre 30 de 1989, desapariciones y ejecuciones por parte de militares en la Cruzada, Remedios.
- ☠ Enero 7 de 1990. Masacre en Pueblo Nuevo Urabá.
- ☠ Enero 14 de 1990. Otra masacre en Pueblo Nuevo.
- ☠ Febrero 24 de 1990. En Cuturú, Cauca, bombardeos, 15 familias desplazadas incluyendo 18 niños.
- ☠ Marzo 21 de 1990. Masacre en la vía Necoclí-Arboletes.
- ☠ Marzo 18 de 1990. Masacre en Apartadó.
- ☠ Marzo 28 de 1990. Nueva masacre en Apartadó.

DESPLAZADOS INTERNOS EN ANTIOQUIA

- ☠ 10 de Octubre de 1990. Entre esta fecha y el 20 de noviembre, en la zona de Zaragoza y Segovia, se producen bombardeos, allanamientos y detenciones arbitrarias luego de una toma guerrillera, son desplazados al menos 200 familias y 21 educadores.
- ☠ Diciembre 4 de 1990. Masacre en Apartadó.
- ☠ 25 de Abril de 1991. Se instala la Brigada Móvil N° 2 con sede en Puerto Berrio, con 1820 soldados profesionales.
- ☠ 26 de Abril de 1991. Asesinados dos periodistas del El Espectador en Segovia, mientras cubrían una noticia sobre paramilitarismo.
- ☠ 24 de Mayo de 1991. Mientras empiezan a hacer públicas denuncias contra el cuerpo elite de la policia en Medellin, se inicia una ola de masacres contra los jóvenes de la ciudad, 15 jóvenes son muertos en dos masacres en los barrios populares.
- ☠ Junio de 1991, nuevas víctimas en masacres en Medellin.
- ☠ 21 de Agosto de 1991. Masacre en Segovia, asesinadas 7 personas.
- ☠ 7 de Septiembre de 1991. Otros 11 jóvenes muertos en Medellin en masacres.
- ☠ 28 de Septiembre de 1991. Otros 4 jóvenes asesinados en masacre.
- ☠ 30 de Septiembre de 1991. Denuncian desaparición de 8 campesinos en el Magdalena Medio, y ola de desapariciones y asesinatos en el Nordeste, de todo esto se acusa a la Brigada Móvil Numero Dos.

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

- ☠ 16 de Octubre de 1991. 11 personas muertas en masacre en el Nordeste.
- ☠ 18 de Noviembre de 1991. 20 jóvenes muertos en tres masacres en Medellín.
- ☠ 11 de Diciembre de 1991. Exodo masivo en Urabá hacia las cabeceras municipales de Apartadó y Curulao.
- ☠ 13 de Diciembre de 1991. Paro cívico en el Nordeste, se denuncia la aparición de otro grupo paramilitar llamado ANA.
- ☠ 17 de Diciembre de 1991. Mientras en el Magdalena Medio un sector de los paramilitares se desmoviliza, se inicia una pugna interna en dichas organizaciones. Son asesinados cerca de un centenar de personas entre políticos, ganaderos y campesinos de la región.
- ☠ 14 de Abril de 1992. Ocho muertos en masacre en Medellín.
- ☠ 21 de Abril de 1992. Nuevos grupos de autodefensa aparecen en la región de Urabá que se adjudican la muerte de varios campesinos y comerciantes.
- ☠ 12 de Julio de 1992. Se inicia tal vez el proceso de invasión más grande que tenga noticia el país, en la Chinita Urabá se asientan unas 5400 familias, la mayoría de ellas de las zonas rurales de Urabá y Córdoba desplazados por la violencia.

DESPLAZADOS INTERNOS EN ANTIOQUIA

- ☠ 14 de Julio de 1992. La Comisión Andina de Juristas de Bogotá revela la existencia de unos 30 mil desplazados por la violencia en Colombia. Según este estudio el mayor índice de desplazados está en Antioquia.
- ☠ 21 de Julio de 1992. Se inicia un éxodo campesino de las zonas rurales de Turbo en la cabecera municipal, el éxodo se regionaliza pidiendo una reforma agraria en la región.
- ☠ 4 de Agosto de 1992. El Comité Interinstitucional de DDHH realizó graves denuncias sobre la violación de los DDHH en Antioquia. Anunció la irrupción de la violencia en el Norte del departamento (Yarumal), con la desaparición de 35 personas. En el Nordeste, denuncian los asesinatos, bombardeos y procedimientos irregulares de la Brigada Móvil N° 2.
- ☠ 24 de Agosto de 1992. Masacrados en Chigorodó 6 personas.
- ☠ 25 de Agosto de 1992. El Comité Nacional de Derechos Humanos revela cifras sobre las masacres en el país, Antioquia resultó la zona más afectada durante 1992, se habían cometido a la fecha 28 masacres con 130 muertos.
- ☠ 19 de Septiembre de 1992. Masacre de 8 campesinos en Las Changas Uribe.
- ☠ 9 de Noviembre de 1992. 17 personas muertas en masacre en Medellín.
- ☠ Diciembre de 1992. Se recrudece la violencia en la ciudad de Medellín, muerte de policías, carros bomba, masacres, etc.

— SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

- ☠ 3 de enero de 1993. En un fallido intento de masacre en el barrio Villatina, de la comuna centrooriental, se produjo un enfrentamiento entre una patrulla de la Sijin y otra del Ejército.
- ☠ 11 de enero de 1993. Nueva masacre en Medellín, 7 muertos.
- ☠ 10 de marzo de 1993. 2 nuevas masacres en los barrios populares de Medellín, 10 muertos.
- ☠ Marzo 4, 1993. Masacradas 5 personas en la finca Villanueva de Turbo, se sindicó de la acción a las Farc.
- ☠ 23 de marzo de 1993. La Policía Nacional publicó un informe estadístico sobre la violencia en 1992, en el se afirma que en ese año se cometieron 25.101 homicidios, de los cuales el Valle de Aburrá aportó 6.317 y la comisión de 29 masacres, lo que la convirtió en la ciudad más violenta del país.
- ☠ 28 de abril de 1993. Los habitantes de la zona del Limbo, los habitantes de los barrios de laderas de la comuna nororiental, realizaron una marcha y una serie de denuncias por el asesinato de 10 líderes comunitarios en los últimos meses, las agresiones procedieron de todos los sectores, de las milicias, paramilitares y del Estado. Denunciaron el éxodo de sus pobladores a otros barrios de Medellín y a otras ciudades.
- ☠ 30 de mayo de 1993. Se da a conocer un nuevo estudio sobre la realidad del desplazamiento en Colombia, publicado por la procuraduría general de la nación, la defensoría del pueblo, y la comisión interamericana de ddhh, el estudio estimaba los desplazados por la violencia en Colombia en 300 mil, de éstos, en el Magdalena Medio antioqueño, el Nordeste y Urabá, había unos 50 mil.

DESPLAZADOS INTERNOS EN ANTIOQUIA

- ☠ Septiembre 7 de 1993. Asesinados 2 obreros bananeros en Carepa, autor desconocido.
- ☠ 7 de noviembre de 1993. Finca Filipinas de Apartadó, masacradas 9 personas y 21 heridas, se sindicó a las Milicias Bolivarianas.
- ☠ 9 de noviembre de 1993. En la finca La Ceja y los Cativos de Nueva Colonia, Apartadó, masacradas 17 personas, se sindicó a los Comandos Populares de Esperanza, Paz y Libertad.
- ☠ Noviembre 26 de 1993. En Nueva Colonia masacradas 13 personas, se sindicó a los Comandos Populares.
- ☠ 18 de enero de 1994. Masacrados 4 jóvenes en el municipio de Bello, presuntamente por enfrentamientos entre las bandas del sector.
- ☠ 22 de enero de 1994. Masacrados 4 jóvenes en Medellín.
- ☠ Enero 23 de 1994, en la Chinita de Apartadó se comete una masacre que deja 35 muertos, se sindicó a las Farc de este hecho.
- ☠ 4 de febrero de 1994. En Urrao, Suroeste antioqueño, aparecieron torturados y asesinados 4 indígenas del resguardo de la comunidad Cristianía.
- ☠ 19 de febrero de 1994. Masacrados 4 jóvenes en Medellín.
- ☠ 28 de febrero de 1994. Asesinados 3 jóvenes de las milicias de la CRS en el barrio Andalucía de la comuna nororiental.

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

- ☠ 14 de febrero de 1995. Asesinada una familia en Cocorná, Antioquia, presuntamente a manos de la guerrilla.
- ☠ 24 de febrero. Masacrados 4 jóvenes en Manrique, comuna nororiental de Medellín.
- ☠ 15 de marzo de 1995. Masacrados en Bello 5 jóvenes, supuestamente fruto del enfrentamiento entre bandas juveniles.
- ☠ 10. de abril de 1995. En Valparaíso, suroeste antioqueño, asesinadas 2 personas presuntamente a mano de paramilitares.
- ☠ 7 de abril de 1995. Asesinados 5 jóvenes en el municipio de La Estrella, vecino a Medellín, presuntamente a manos de las Milicias populares.
- ☠ 29 de abril de 1995. Asesinados 4 jóvenes en el barrio San Javier, presuntamente a manos de las Milicias Populares.
- ☠ 6 de mayo de 1995. Asesinados 3 jóvenes en Itagüi, ese mismo día son asesinados 3 campesinos en Don Matías.
- ☠ Mayo 13 y 14 de 1995. En Turbo masacradas 21 personas, se atribuye a las Autodefensas al mando de Fidel Castaño.
- ☠ 20 de mayo de 1995. Asesinados en el municipio de La Estrella 3 jóvenes, presuntamente a manos de las Milicias.

DESPLAZADOS INTERNOS EN ANTIOQUIA

- ✖ Mayo 23 de 1995. Asesinados 4 jóvenes, uno de ellos de Coosercom se acusa a Coosercom de la masacre.
- ✖ 8 de junio de 1995. Masacradas 3 personas en la finca Argentina, cerca a Currulao, Urabá antioqueño, se sindicó de esta acción a la guerrilla.
- ✖ Junio 21 de 1995. En Salgar, suroeste antioqueño, asesinados 3 campesinos, según versiones, a manos del ELN.
- ✖ 21 de junio. En Urrao, suroeste antioqueño, asesinados 2 campesinos a manos de Paramilitares.
- ✖ 28 de junio de 1995. Masacrados en Medellín 4 jóvenes, se acusa a Coosercom.
- ✖ 15 de julio de 1995. Asesinados 4 comerciantes en Apartadó.
- ✖ Julio 30 de 1995. En la carretera que comunica a Turbo con Apartadó son masacrados 4 campesinos, se sindicó a la disidencia del Epl.
- ✖ Julio 31 de 1995. En Barbosa, municipio al norte de Medellín, asesinados 4 obreros a manos de paramilitares.
- ✖ Agosto 3 de 1995, en la finca Limón, 4 muertos.

== SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

- x Agosto 13. En la finca del Bosque de Chigorodó y la Martina de Apartadó masacradas 24 personas, se dedica a Esperanza, Paz y Libertad.
- x Entre agosto 15 y 30 de 1995 en Chigorodó son asesinados 3 maestros, éxodo en todo el eje bananero de maestros.
- x 22 de agosto de 1995. Asesinadas en Peque, al occidente antioqueño, 3 campesinos, presuntamente por las Farc.
- x 27 de agosto de 1995. En San Carlos, oriente antioqueño, asesinada una familia de 4 personas a manos de paramilitares.
- x 31 de agosto de 1995. Asesinados 3 jóvenes en la comuna nororiental, presumiblemente a manos de las Milicias del Eln.
- x Septiembre 14 de 1995. Masacradas 6 personas en Currulao.
- x Septiembre 20 de 1995. En Apartadó masacradas 24 personas, se dedica a las Farc.
- x 24 de septiembre de 1995. Asesinados en el barrio La Floresta, al occidente de Medellín, 4 jóvenes, presuntamente a manos de las Milicias.

TESTIMONIOS

TESTIMONIO DE UNA DESPLAZADA DEL NORDESTE

Doña Rosaura salió con sus tres hijos y sus tres nietos de una vereda de Tarazá por miedo a los que llamaba «hombres del monte». Llegaron al barrio La Cruz de la Comuna Nororiental, donde inicialmente un vecino les dio alojamiento por unos días. En los años que llevan en Medellín ha logrado mantener a su familia con el dinero que ella y una de sus hijas ganan trabajando en bares y residencias. Uno de sus nietos sufre de retardo mental. En el caso de doña Rosaura se combina el desplazamiento forzado por la violencia (que aparentemente no es la causa principal), con la situación de falta de oportunidades y abandono

en que se encuentra el campo. Lo más triste de doña Rosaura, es que no tiene conciencia, incluso, de que es una desplazada por la violencia y por ende nunca buscó ningún tipo de ayuda.

«Voy a cumplir tres años en Medellín y he estado en seis casas distintas. La primera tenía piso de tierra, cancelito de tabla, techo de zinc, y era prestada. La segunda tenía el piso de cemento, pared de material, pagaba cinco mil pesos mensuales. La tercera era de piso de tierra, cancel del tabla, y era prestada. La cuarta era de cemento, pared de tierra y pagaba ocho mil pesos mensuales. En la quinta casa pagué ocho mil pesos también. Después nos pasamos para ésta y pagamos once mil, es de adobe y piso de tierra.

Yo me vine de Puerto Valdivia, pero ya había andado mucho. Nos tocó salir del campo porque mi esposo consiguió un trabajo en una finca que quedaba entre Valdivia y Tarazá, de allá nos salimos porque se nos quemó el campamento luego de que un fogón de leña accidentalmente provocara un incendio. Entonces nos vinimos para Tarazá, él para una finca y yo me quedé en el pueblo esperando a mi bebé mayorcito. Después volvimos a trabajar a una hacienda que se llamaba San Carlos, ahí estuvimos siete meses.

Ahí fue donde empezaron los problemas, empezó a llegar gente del monte, que pasaban por la finca haciendo daños, matando la gente y robando. Después pasaba el ejército, pasaban por la casa preguntando que si habíamos visto los otros, y hacían lo mismo, entonces si le hablábamos al ejército era malo, y si le hablábamos a la guerrilla peor.

Nos volvimos para Puerto Valdivia, para donde mi mamá, y de allá a una finca que se llama Remolinos. Allá nos pusimos a rozar para sembrar maíz junto con mi papá. Después nos fuimos para San Matías cerca de Puerto Valdivia, de allí nos fuimos para Bélgica, una vereda, y después para Cáceres, allí mi esposo consiguió trabajo en una mina de oro. Allí quedó atrapado en un socavón y murió. Con lo que me dejó mi esposo conseguí una casita en Puerto Valdivia.

Me cansé de tener que trabajar en todo tipo de labores en el campo, y de no ver la plata. Una cuñada mía, que estaba de vacaciones, me dijo que por qué no me venía para la ciudad que eso por allá era muy bueno, que en Medellín se trabajaba más fácil y se conseguía más plata».

TESTIMONIO DE UNA DESPLAZADA DE LA ÉPOCA DE LA VIOLENCIA

Doña Aracelly también vive en un barrio de la Comuna Nororiental y vino huyendo de la violencia de los años 50s, desde entonces el núcleo familiar de doña Aracelly ha servido de receptor de más de dos generaciones de desplazados. Este es su relato.

«A mí me tocó venirme de Salgar en el Suroeste antioqueño. Mi familia se vino siendo yo aún una niña, porque estaban matando mucha gente.

Cada ocho días, los domingos pasaban hasta con tres y cuatro muertos en camillas. Mi casa quedaba en un altico y la carretera pasaba cerquita. Yo me asomaba al corredor y veía la gente pasar en las bestias cargando los muertos. Lo que más miedo me dio fue un día estando en el corredor, oí unos gritos y unos lamentos, después supe que a uno de los vecinos lo habían matado, despedazado y arrojado a una quebrada. Así era que los conservadores mataban a los liberales. Mi papá era muy callado, y no participaba en política. Pero se vino de miedo de que nos mataran a alguno de los muchachos. De ahí nos fuimos para el Cauca (Ant.), a un sitio que se llamaba El Cangrejo. Allá las tierras eran muy áridas, no como en Salgar donde había mucha abundancia, mucho revuelto y los campesinos vivían bien. En Salgar trabajábamos por el sistema de agregados. Es decir, en una finca grandísima de un rico, que le dejan las fincas a las familias para que trabajen. El día que nosotros salimos de Salgar, salimos varias familias juntas. Tuvimos que dejar

abandonada nuestra finca, donde se sembraban hortalizas, frutas y cebolla, dejamos abandonados los árboles frutales y todo eso, así como la casa de tapias que tenía cinco piezas muy cómodas. En el Cangrejo, que queda cerca de Anzá, vivíamos de lo mismo, de la tierra, pero ya esta vez nos tocó fue rozar la maleza, y no teníamos la posibilidad de cultivar. A pesar de que en estas nuevas tierras había mucho más pobreza no había violencia. Había una fonda, donde llegaban todos los campesinos con sus bestias, se emborrachaban, y bailaban con todas las señoras que llegaban allí, bailaban discos como el del «Puente roto» y otros de música guasca, muy de vez en cuando algún campesino borracho salía a hacer tiros al aire. Pero en general eso era muy sano.

A mi papá le ofrecieron una casa en Medellín y se vino. Eramos diez hijos, mi papá y mi mamá. Mi papá le compró a un señor que se llamaba Andrés Restrepo por dos mil pesos hace 24 años, a mi papá le gustó por aquí por la buena divisa, aunque hubiéramos podido comprar más abajo. Mi papá empezó a sembrar hortalizas. Después yo me casé, armé un rancho en la finca de mi papá y le pagaba cincuenta pesos de arriendo.

En la época en que vinimos por acá solo habíamos cuatro familias en La Cruz, los Penagos, los López, los Durango y la familia Mancoqui, que después se fueron para Belencito. En la primera etapa del barrio fue muy difícil, estuvimos como veinte años con lámparas de petróleo, velas y frascitos con mechas, entonces mucha gente vendió y compraron más abajo, por ejemplo en el barrio Santa Inés, que sí tenía agua y luz. Ellos se aburrían porque esto era una zona de riesgo, que ni riesgo de carretera, ni de agua, ni de que subiera un carro. Después de que nosotros construimos la carretera, subimos el agua y construimos una capillita, y hasta una cancha para que se revuelquen, sí empezó a llegar mucha gente».

TESTIMONIO DE UNA NIÑA DESPLAZADA

Eugenia tiene diez años, y también vive en el barrio La Cruz de la comuna Nororiental. Eugenia como tantos niños han llegado a Medellín huyendo de la violencia de Urabá. Esta es la segunda vez que Eugenia llega a Medellín. La primera vez fue hace dos años, cuando su mamá salió porque el ejército mató a dos vecinos jóvenes. El 10 de marzo de este año regresó con su tío porque el ejército les quemó la casa el 19 de diciembre del año pasado, después de que golpearon a sus padres. Se hospeda en la casa de la abuela, quien vino hace seis años huyendo y vive en la casa que era de un señor, llegado a la cruz hace diez años por las mismas razones. Los siete hermanos de Marly se quedaron en las cabeceras de Mulatos, en el Norte de Urabá. Extraña las vacas, la leche, los huevos y sobretodo la escuela porque ella quisiera que pasara un año completo y poder estudiar sin tropiezos. En la Escuela Rural Integrada de La Cruz no hay cupo para ella. Eugenia vive de la mendicidad, junto con su abuela, que practica esta profesión casi desde el momento de su llegada a Medellín.

Según una encuesta realizada por Andas recientemente entre sus afiliados, existen entre ellos unos seiscientos niños, sin contar casos como el de Eugenia, que no figura en el mapa de ningún desplazamiento.

«Vine hace 20 días con mi tío, porque allá en Urabá donde vivía llegó un día un avión, primero llegó un helicóptero y luego el avión, y entonces cuando la gente iba corriendo por la cancha hacia sus casas, ahí mismo comenzó el avión a bombardear y mató una niña e hirió a un muchacho, era una niña que jugaba mucho con nosotros, se llamaba Janeth.

Nosotros llegamos hasta la casa y nos metimos debajo de las camas, otra gente se salvó corriendo hacia el monte.

Después a los días volvieron, nos quemaron la casa y no nos quedó ni la ropa. Nosotros estábamos en una reunión en la escuela, en un punto que se llama La Hacienda, cuando oímos una balacera, y cuando salimos a asomarnos, ya venían unos soldados hacia la escuela, mientras otros quemaban la casa. Nosotros salvamos algo de lo que se estaba quemando.

Nosotros teníamos una tierra grandecita, con algunos sembrados de frijol, maíz y arroz, teníamos una vaca, y mi mamá trabajaba mucho arreglando los potreros, para que las vacas pudieran dar leche. A nosotros nos tocaba hacer el almuerzo, y al medio día llevárselo a la mamá y ayudarle a trabajar.

Después de que quemaron la finca a mi papá y a mi mamá los cogieron, los aporrearón y se los llevaron lejos dejándonos solos en la casa. Ellos estuvieron como un mes en el batallón por nada, todo porque mi mamá tenía una tiendecita que funcionaba en las noches y un día les dijo que no se llevaran el mercado sin comprarlo, y ellos dijeron que a la guerrilla sí se lo regalaban y a ellos no. A mi mamá no la aporrearón mucho pero a mi papá sí.

A muchas personas familiares de nosotros y vecinos, que también los habían extendido en la cancha, se los llevaron y también los soltaron como al mes, a todos les decían que eran milicianos, a todos les quemaron la casa.

TESTIMONIO DEL DESPLAZAMIENTO

El 20 de Febrero de este año un grupo de pistoleros irrumpió en la casa habitada por la familia García, en un barrio de Municipio de Envigado. Tras dirigirse a una de las alcobas, acribillaron en su cama a Oscar.

Oscar no se encontraba en ese momento haciendo la siesta precisamente, estaba confinado al reposo forzado, bien en su silla de ruedas o en lecho, pues su condición de discapacitado así se lo imponía. En un atentado que había sufrido varios años atrás Oscar había perdido ambas piernas y un brazo.

La muerte de Oscar se perdió entre esa larga letanía de sucesos que a diario llenan las páginas judiciales de los diarios locales.

Hay sin embargo dos grandes circunstancias que rodearon este trágico evento, que nos llevan a una profunda reflexión sobre lo que está pasando en Medellín.

La primera es ver con preocupación el grado de contaminación mental a que está llegando nuestra sociedad, donde cualquier frontera de humanismo se ha venido diluyendo. Ni el niño que despreocupadamente juega una ronda infantil en la calle, ni el estudiante que rutinariamente asiste a sus clases en su liceo o universidad, ni los minusválidos, se salvan de esta marea de odios, que cuando está alta saca a flote los más bajos instintos que una sociedad pueda tener represada.

La segunda circunstancia es que la muerte de Oscar fue el puerto final de un largo itinerario de desplazamientos, que se había iniciado en 1987 cuando sufrió el primer atentado. Ese año Oscar había iniciado su primer año de ejercicio como normalista en Puerto Berrío, allí se había adherido a un grupo de maestros que simpatizaban con la UP, entonces recién constituida como partido de izquierda, el fenómeno electoral de las elecciones de 1986.

Cuando transitaba justamente en frente de la alcaldía de esa localidad, diagonal al comando de Policía, un grupo de los Macetos, versión rural de bota y sombrero de paja, de lo que fue el nefasto grupo paramilitar MAS en la ciudad, le disparó repetidamente a la humanidad de Oscar. Ese fue uno de los tantos atentados de ese grupo paramilitar que ese

año en poblaciones del Magdalena Medio como Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Nare, cobraron la vida de unas 40 personas entre maestros y sindicalistas.

Era tal el poderío y el régimen de terror que el paramilitarismo había instaurado en la zona del Magdalena Medio por ese entonces, que impartieron la orden al Hospital de Puerto Berrío de que Oscar no fuera atendido de sus graves heridas. En vista de esto su familia intentó sacarlo hacia Medellín por vía aérea, pero una orden similar llegó al aeropuerto de la región.

Un señor que tenía un Jeep se compadeció del caso de Oscar, y con todo el sigilo del caso por la noche logró trasladar a Oscar a un hospital de Medellín. En el hospital San Vicente de Paúl lograron salvarle la vida, pero el largo camino que le tocó recorrer cobró su peaje, la cangrena había carcomido parte de su cuerpo y los médicos le tuvieron que amputar ambas piernas y uno de sus brazos.

Su condición de invalidez y los nefastos hechos del pasado no lograron sin embargo, doblegar su voluntad.

En 1989 en compañía de otros desplazados de la zona del Magdalena Medio, Oscar fundaría la Seccional de Cedavida en Medellín, primera organización en tener como su objetivo la atención de denuncia a la situación de los desplazados. Dicha organización iniciaría labores con 17 familias.

Debido a la falta de presupuesto, enviado por la Central de Cedavida en Bogotá, y a los problemas políticos en el seno de sus directivas, la seccional de Medellín se disolvió. En ese momento contaba con 134 familias afiliadas.

Sin dejarse amilanar por las nuevas contrariedades, con un exiguuo presupuesto, conseguido con algunas ONGs internacionales, Oscar fundaría en 1992 una nueva organización para los desplazados, del cual él sería su presidente y promotor.

Oscar era lo que se podía llamar «un organizador por naturaleza». Es por esto que intentó constituir una acción comunal en su barrio ubicado en Castilla.

Rápidamente su vocación organizativa entró en conflicto con las bandas delincuenciales que operan en el sector; éstas, en medio de su ignorancia y paranoia, encontraron tras la propuesta de organizar un acción comunal, la falacia de que lo que se estaba fraguando era un grupo de milicias para conspirar contra las bandas del barrio.

Cuando uno de los miembros de una de las bandas intentó atentar contra la vida de Oscar, Jorge (nombre ficticio), un joven que era amigo de Oscar, quien conociendo la trayectoria de éste y de las amenazas que sobre él pesaban, no lo desamparaba durante el día, reaccionó instantáneamente y de un tiro mató al atacante.

Jorge después de estos hechos huyó del barrio. A pesar de los numerosos testimonios que daban cuenta de lo ocurrido Oscar fue detenido y puesto a órdenes de la Fiscalía, y sin consideración a su estado fue remitido a Bellavista.

Allí por la falta de los cuidados especiales que necesitaba Oscar, higiene, curaciones, movilidad, su estado de salud se empezó a deteriorar rápidamente, las ulceraciones empezaron a invadir su cuerpo. Mediante acciones urgentes de los Organismos Internacionales de DDHH y las ONGs de la ciudad, enviadas tanto al gobierno colombiano como a la Comunidad Internacional, Oscar fue finalmente liberado a finales del año pasado.

Al salir de prisión Oscar y su familia se residenciaron en el centro de la ciudad. En esta ciudad no hay santuario, para huir de la ola enfermiza de retaliaciones donde el odio parece ser una brújula infalible. A los pocos días los miembros de la banda encontraron la casa de Oscar; éste alertado por la voz de un vecino, logró hacerle otra gambeta a la muerte y de nuevo su familia se trasladó esta vez a Envigado, donde no pudo hacerle el último desquite a la muerte.

LOS ROSTROS DEL DESPLAZAMIENTO

«En el barrio donde yo vivía en Apartadó, fui por un tiempo coordinadora del Comité de Salud, luego renuncié y me eligieron presidente de la Asociación de Padres de Familia de la escuela donde estudiaban mis hijos.

Cuando me tocó salir de Apartadó me desempeñaba como presidente de la Acción Comunal de mi barrio, a la que había sido elegida por un período de dos años.

A mediados de junio dos tipos se pararon en la puerta de mi casa y anotaron el número en un cuadernillo que llevaban.

A la semana siguiente, cuando salía del colegio José Celestino Mutis, donde cursaba 5° de bachillerato en la jornada nocturna, unos tipos tomaron una fotografía del grupo con el cual yo salía, desde ese momento, y durante varios días, sentí que era perseguida por hombres en moto.

Finalmente el 11 de agosto a eso de las 9 de la noche, un compañero de la Acción Comunal me advirtió que en mi ausencia, hombres que se habían identificado como de Los Comandos Populares habían pasado por el barrio preguntando por «La mona», que era como a mí me decían en el barrio, que me habían dejado una notificación, que yo ya figuraba en la lista porque era una ficha clave de la Unión Patriótica en la región.

Esa noche me fui a dormir donde un pariente.

El sábado 12 de agosto, entre las 6 y las 7 p.m. dos hombre en moto, armados, fueron a mi casa a preguntar por mí de nuevo.

No entiendo por qué para esa gente es un pecado pertenecer al partido de la UP. A mí me tocó salir de Apartadó sin poder sacar siquiera mis pertenencias de la casa.

Me vine con mi hija mayor que tiene 15 años y cursaba 3º de bachillerato, mi hijo que le seguía, que tiene 14 años y cursaba 2º bachillerato, otro que tenía 12 años y cursaba 5º de primaria, otro que tenía 9 años y cursaba 3º de primaria, y mi hija menor de 7 años, que cursaba 1º de primaria.

Me tocó retirar a todos mis hijos de sus estudios y venirme con ellos pues en Urabá existe una ley según la cual si la persona que ellos buscan no se encuentra, entonces esperan un tiempesito y toman represalias contra toda la familia, eso ya lo han hecho.

Mis hijos y mi esposo se fueron para el municipio de Mutatá, espero reunirme con ellos aquí en Medellín donde me encuentro yo, tan pronto como sea posible».

Cerca de un centenar de denuncias como la de doña Ana Lía, todos desplazados de la región de Urabá y residenciados en la ciudad de Medellín, reposan en las oficinas de Derechos Humanos de la Procuraduría Regional y de la Defensoría del Pueblo.

Si bien el grueso de los desplazados tuvieron que salir de Urabá por ser militantes de la Unión Patriótica, hay casos que ni el mismo desplazado se explica los motivos de su salida, como consta en la denuncia de «don Roberto», con copia en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo:

«Los hechos se presentaron el 1º de agosto, encontrándome en la Iglesia católica del municipio de Carepa, un desconocido se me acercó ese día con un arma de fuego en la mano y me apuntó, a la hora de dispararme vaciló, pues en ese momento yo sostenía en mis brazos una pequeña de dos años, mi hija, al parecer eso lo confundió y se abstuvo de ejecutar el crimen.

443. Mi oficio en la región de Urabá era conductor de un colectivo, no tengo antecedentes de ninguna índole, nunca recibí amenazas de parte de ningún grupo, nunca he tenido militancia política, por lo tanto no entiendo los motivos de ese macabro hecho. Actualmente me encuentro residenciado en el barrio Santo Domingo Savio de Medellín.

ANEXOS:

GENERALIDADES SOBRE LAS REGIONES ANTIOQUEÑAS AFECTADAS POR EL DESPLAZAMIENTO

URABÁ:

La región de Urabá es una de las de más importancia en la geopolítica del país, es la salida de Antioquia al mar, puente entre Centroamérica y América del Sur, presenta un extenso entramado de canales naturales (ríos, puertos) que eventualmente conectados con el departamento del Chocó posibilitan una salida del Océano Pacífico al Atlántico. En la época de la colonia y los piratas, a principios de siglo los contrabandistas, y

ahora los narcotraficantes, han usado esta ruta como una de las más vitales para la entrada clandestina de armas y salida de droga del país.

A la ubicación estratégica de Urabá se suma su potencial económico, una de las grandes regiones productoras de banano del mundo, y en los últimos meses se han creado grandes expectativas sobre la región, por la existencia de ricos yacimientos de petróleo.

Con la bonanza del banano en los años 60s y 70s, con el alza de los precios internacionales de la fruta, llegaron atraídos los primeros colonos, que huían de la violencia bipartidista en otras regiones, otros solo llegaron buscando un mejor prospecto económico, los primeros colonos llegaron de Córdoba, la región paisa y el Chocó. De esta época se remontan los primeros sindicatos, Sintrabanano y Sintagro.

En los 80s los empresarios iniciaron un proceso de industrialización y tecnificación en la producción del banano, a la par del ensanchamiento portuario. A la región siguieron llegando más colonos, más trabajadores, las organizaciones sindicales crecieron, la guerrilla, instalada años atrás y también llegada de otras zonas (Córdoba), también se hizo fuerte en la región. Simultáneamente, con la intervención de estos actores, los conflictos se multiplicaron. Inicialmente entre los empresarios y sindicatos, con un paramilitarismo auspiciado por los empresarios del banano, posteriormente con la presencia del narcotráfico (Fidel Castaño). La violencia se multiplica no solamente en su capacidad operativa y financiera, sino en sus modalidades (la masacre).

A finales del 80 se suman a estas circunstancias, las contradicciones internas por las guerras en el control político de la región de los grupos de izquierda Farc y Epl, las cuales se agudizaron por la re inserción a la vida legal del segundo grupo. A este mosaico de violencias, el Estado y sus organismos de seguridad más que reguladores legales han jugado un papel como instigadores de la violencia.

En esta década el conflicto social (gremios bananeros-trabajadores, invasiones, paros cívicos, minorías) ha llegado a su máximo expresión.

Desde noviembre de 1994, con la ofensiva decretada por los paramilitares para erradicar la guerrilla, en el norte de Urabá, y con la crisis del sector bananero la violencia sufre una escalada impresionante, al punto de que hoy es tal vez la región más violencia política no sólo del país sino de América Latina.

Desde el año pasado se inició en la región el llamado gobierno de consenso con el nombramiento a la alcaldía de Apartadó de Gloria Cuartas, gracias a un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas del municipio. Esta propuesta sin embargo es más simbólica que real, pues no ha logrado atajar la violencia, y el consecuente desplazamiento de la población civil.

Grupos ilegales armados de la región

- Frente 34 de las Farc, Mutatá.
- Frente 50. de las Farc, desde San Pedro hasta Mutatá.
- Milicias Bolivarianas de las Farc, Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.
- Frente 57 de las Farc, Urabá chocóano.
- Frente 58 de las Farc, Arboletes.
- Autodefensas de Córdoba y Urabá, desde Turbo hasta el norte de Urabá.
- Disidencia del Epl, Necolí, San Pedro de Urabá y Turbo.
- Comandos Populares (Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó).
- Frente Manuel Hernández (Boche) del Eln, Chigorodó.

Organismos de seguridad del estado en la región

- Puestos de policía en cascos urbanos.
- Puesto del ejército en Nueva Colonia.
- Estación de policía y estación del Das en Apartadó.
- Comando de policía de Urabá con sede en Carepa.
- Batallón Voltigeros.
- Brigada XVII, Carepa.
- Puesto del ejército en Chigorodó.

ORIENTE ANTIOQUEÑO

Esta rica región agrícola, fue desde el siglo pasado trabajada sobre la base del minifundio, a lo largo de este siglo tuvo una vida tranquila y se crearon fuertes lazos de solidaridad entre sus pobladores. Esta región fue prácticamente ajena al conflicto de la violencia en los años 50s en Colombia y a la guerrilla de izquierda de los años 60.

En 1974 se inició la construcción de la central hidroeléctrica de Guatapé, entonces el proyecto de generación de energía más ambicioso del departamento.

Esto implicó cambios radicales, en el paisaje, el ecosistema y en las relaciones con la tierra en la región. Un pueblo entero fue sumergido por las aguas de la nueva represa.

Desde entonces se generó un movimiento cívico, de parte de sus pobladores, en busca de una indemnización, vías de comunicación, así como un trato diferencial en materia de servicios públicos. Este movimiento se consolidó regionalmente en 1982. En 1983 se creó la Coordinadora Cívica Regional del Oriente y en 1984 se organizó un paro cívico regional.

Sumada su riqueza agrícola, hidroeléctrica, y a sus paisajes naturales, se da un fenómeno de valorización de la tierra, con la construcción a principios de la década del 80, de la autopista Medellín-Bogotá. En los bordes de la autopista se construyeron lujosas fincas de recreo y se da una penetración masiva de los capitales del narcotráfico. En el municipio de Puerto Triunfo monta su principal centro de operaciones en la finca Nápoles. En la región empiezan a aparecer por esta época los grupos guerrilleros, Epl, Eln, Farc, igualmente se militariza la región. La X brigada del ejército con sede en el Magdalena Medio, trasladó entonces el proyecto paramilitar, que se había cuajado en Puerto Boyacá, hacia el oriente antioqueño. Para 1989 habían sido asesinados por parte de este proyecto, los principales líderes de la Coordinadora Cívica del oriente, los sobrevivientes fueron forzados a huir. En el sólo municipio de San Carlos, fueron asesinados 17 dirigentes cívicos.

Luego de la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1992, algunos paramilitares del Magdalena Medio, continuaron con el negocio y trasladaron sus operaciones al oriente.

El desplazamiento en la región, se realiza fundamentalmente de las zonas rurales a las cabeceras municipales.

Grupos ilegales en la región:

- Frente 90. de las Farc.
- Frente Carlos Allirio Buitrago del Eln.
- Frente Elkin González del Epl.
- Grupo paramilitar los Macetos.
- Grupo paramilitar de «Ramón».
- El grupo Convivir (Cooperativa de seguridad rural del gobierno).

SUROESTE ANTIOQUEÑO

Esta fue sin duda, la región del departamento más azotada por la violencia bipartidista. Este hecho fue propiciado por la presencia en la región de los intereses latifundistas, de la familia de Mariano Ospina Pérez, expresidente de Colombia y cabeza de la reacción conservadora. En esta época su familia poseía las mejores tierras dedicadas a la ganadería y al cultivo del café. En esta época primó la gran hacienda y el monocultivo del café, así como la clase social de los jornaleros.

En la década de 1970, un grupo de familias, encabezadas por Ernesto Garcés Soto, sucedieron a los Ospina Pérez en la posesión de las haciendas y se vincularon a la exportación de café.

Como en otras regiones del país, los guerrilleros liberales que sobrevivieron, se adhirieron a las guerrillas de izquierda en la década del 70, en este caso el Eln y el Epl. Por esta época empieza a operar en la región dos grupos guerrilleros independientes, el Capitán Franco, como disidencia del Eln, y Patria Libre, disidencia del Epl. Por esta época la región fue sacudida por fuertes movimientos cívicos que reclamaban una reforma agraria.

La violencia paramilitar allí ha tenido una característica sui generis con relación al resto del departamento. En primer lugar, esta ha sido selectiva y no se ha dado mucha ocurrencia al fenómeno de las masacres, los paramilitares igualmente han eliminado por igual supuestos simpatizantes de la guerrilla y personas calificadas como víctimas de la limpieza social. Igualmente la financiación de estos grupos de la región, no ha estado ligada al narcotráfico sino a la burguesía cafetera, en cabeza de Ernesto Garcés Soto, exparlamentario de la República.

El desplazamiento en la región ha sido en flujos muy lentos y se ha dado poco hacia Medellín. El mayor centro receptor de inmigrantes del Suroeste han sido las zonas cafeteras del Viejo Caldas.

En dos grandes operativos, uno en diciembre de 1994 y otro en septiembre de este año, la Fiscalía, desarticuló una red paramilitar de más de 40 miembros de la región, incluyendo al alcalde de Armenia Mantequilla, el comandante de la policía de ese municipio, y el dirigente Ernesto Garcés.

Grupos ilegales en la región:

- Frente Che Guevara del Eln.
- Compañía Nutibara de las Farc.
- Frente 34 de las Farc.
- Capitán Franco, disidencia del Eln.
- Autodefensas Marco Tulio Marin.
- Mano negra.
- Macetos.
- Amor por Andes.
- Bolívar sin guerrilla.
- Kan Kil
- Jardín Libre.
- Racuminis

Organismos de seguridad del Estado en la región

- Das rural, con sede en támesis.
- Batallón Nutibara, en Andes.
- Batallón Granaderos.
- Estación de la Silin.
- Puestos de policías en las cabeceras municipales.

NORDESTE ANTIOQUEÑO

Desde la época de la corona española, y durante buena parte de la independencia, el Nordeste fue uno de los filones más grandes, en el país, para la extracción del oro. Desde el siglo XVIII, se introdujo una considerable cantidad de negros esclavos a la región, para emplearlos como mano de obra en las minas. Desde entonces el nordeste ha ocupado cerca del 80% de la producción de oro del departamento.

A principios del siglo XX, compañías extranjeras como la Frontino Gold Mine incursionaron en la extracción industrial del oro, con la instalación de modernas dragas.

Como toda bonanza aurífera, esta trajo muchos colonos, aventureros y violencia, esto fue un proceso similar a lo ocurrido en la zona esmeraldífera de Boyacá.

A partir de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el gobierno conservador nombró por decreto alcaldes de su filiación en pueblos de tradición liberal como los del nordeste antioqueño. Los liberales se sublevaron, conformaron sus propias guerrillas (las del Tigre).

Alrededor de 1970, el Eln y su entonces jefe Fabio Vásquez Castaño, tomó como su centro de operaciones a nivel nacional, el nordeste antioqueño, y cooptó buena parte de las guerrillas liberales. Este grupo guerrillero allí fue virtualmente derrotado en la operación Anorí de 1973. Sin embargo en los 80 se reactivaría, haciéndose fuerte en la región.

La bonanza del oro paradójicamente, sólo conllevó a más miseria para la región, se produjo un verdadero desastre ecológico en los pueblos, nunca fueron dotados de servicios públicos, ni de vías modernas de comunicación (el oro, por razones de seguridad, siempre se transportó por vía aérea).

La lucha por servicios públicos y por infraestructura social dieron origen a fuertes movimientos cívicos en la región y a una escalada de paros cívicos regionales a principios de la década del 80.

Tal como sucedió en el oriente antioqueño, el modelo paramilitar instaurado inicialmente en Puerto Boyacá, fue trasplantado a esta región

para contener el avance de la insurgencia y de la acción política legal de la Up. En 1988, más de medio centenar de personas fueron masacradas en la plaza principal del municipio de Segovia, éste acto de barbarie fue fraguado entre los paramilitares de Puerto Boyacá, y la base militar con asiento en la región, tal como fue denunciado nacional e internacionalmente por los organismos de defensa de los derechos humanos.

Frente al desplazamiento en esta región, han contribuido varios actores, las constantes operaciones y bombardeos del ejército, los paramilitares, y las milicias del Eln, quienes han practicado la llamada limpieza social en las zonas rojas de los cascos urbanos.

La mayoría de los desplazados, se han instalado en el Bajo Cauca, en otros municipios de la región, y en una muy pequeña proporción hacia Medellín (según fuentes de los organismos de derechos humanos de la ciudad, luego de la masacre en segovia, sólo arribaron unas 5 familias a Medellín.

Grupos ilegales en el Nordeste

- Frente José Antonio Galán, Eln.
- Compañía Anorí, Eln.
- 2 frentes de las Farc.
- Muerte a Revolucionarios del Nordeste.
- Autodefensas del Nordeste Antioqueño.
- Fuerzas del pueblo en acción.

Organismos de seguridad del Estado en la región

- IV Brigada.
- Batallón Bomboná.
- Batallón Palaguas.
- Das rural.
- Puestos de policía en las cabeceras municipales.

MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO

El Magdalena Medio es un región que geográficamente abarca parte de los departamentos de Antioquia, Santander, Caldas, Boyacá y Cundinamarca.

El Magdalena Medio antioqueño (Puerto Berrío) y el santandereano (Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí), han sido los sitios más afectados por la violencia.

En la región, luego de la violencia bipartidista, las autodefensas campesinas que luego pasarían a ser orientadas por las Farc, forman allí parte de las llamadas repúblicas independientes. Esta región se convirtió en los años 60 en uno de los focos centrales del conflicto nacional. En esta región también surgiría el 4 de julio de 1964 el Eln (Simacota).

Para 1970 esta región era la más militarizada del país. A su turno las Farc, lanzaría una vasta campaña por conquistar militarmente todo el Magdalena Medio. En esta empresa las Farc se involucraron en extorsiones, secuestros, ejecuciones, no solamente contra los grandes hacendados sino contra algunos medianos y pequeños. Por esta época el movimiento cívico, encabezado por la Anuc, también se hizo fuerte.

En 1983, los terratenientes y algunos medianos hacendados, encabezados por Pablo Emilio Guarín, y en contubernio con las Fuerzas Armadas en la región, crearían los primeros grupos paramilitares. La consigna era desterrar a las Farc de la región.

Gracias a la protección del ejército, los narcotraficantes instalaron en la región, sus más importantes centros de procesamiento, transporte y estructura militar, y gracias a su poderío logístico, efectivamente lograron desterrar a las Farc.

Esta región para mediados de la época del 80, vivió un verdadero régimen del terror, auspiciado por los paramilitares en cabeza de Henry de Jesús Pérez, la situación llegó a tal extremo, que sólo los simpatizantes de estos grupos tenían derecho a vivir en la región.

Para 1988 las autodefensas del Magdalena Medio, rompieron con la orientación de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, lo que llevó a sangrientas guerras internas por el poder al interior de los paramilitares. este nuevo ciclo de violencia también golpeó por igual a políticos de la región y campesinos, colaboradores de las distintas facciones de las autodefensas.

El desplazamiento a esta región se ha dado hacia los albergues de Barrancabermeja fundamentalmente, y en menor medida hacia otras regiones del departamento antioqueño y Medellín.

Muchos de los simpatizantes de los paramilitares del Magdalena Medio, han repoblado otras zonas del departamento.

Organizaciones ilegales que operan en la región

- Frente 14 de las Farc.
- Frente María Cano del Eln.
- Frente Carlos Alirio Buitrago, Eln.
- Mas.
- Autodefensas del Magdalena Medio.
- Frente 24 de las Farc.

Organismos de seguridad del Estado

- XIV Brigada.
- Batallón Nueva Granada.
- Luciano D'Elhuyar.
- Brigada Móvil No. 2.
- Puestos de policía.

BAJO CAUCA

Esta es una región cuya base económica ha sido la ganadería extensiva y la minería. Esta región toma relevancia estratégica gracias al hecho de estar ubicada sobre la troncal que conduce a la Costa Atlántica desde Medellín. Los problemas del pasado de esta región estuvieron muy relacionados con los de la zona minera del nordeste. Los mismos actores armados que operaban en esta región vecina extendían su acción al bajo Cauca. Desde mediados de la época del 80, la situación empezó a complicarse para esta región por la irrupción del narcotráfico, que tomaron ésta como una zona de retaguardia para comprar tierras y encontrar refugio luego de las operaciones de persecución de las autoridades en otras regiones del país, tal es el caso del cartel de Medellín y el cartel de Cali.

El fenómeno creciente de la compra de tierras por los narcos, los cultivos ilícitos y el paramilitarismo, especialmente a partir de la década del 90, ha forzado el desplazamiento de una gran cantidad de pequeños campesinos.

Grupos ilegales en la región

- Frente Compañero Tomás, del Eln.
- Frente 34 de las Farc.
- Mas.
- Grupos de sicarios al servicio de narcotraficantes.

Organismos de seguridad del Estado

- Puestos de policía.
- Base militar de Tarazá.
- Das rural.

BIBLIOGRAFÍA PARCIAL

Avance investigativo del diagnóstico sobre desplazados internos, Sección de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Colombia: «Colombia: La vida no vale nada» . Rev. IDEELE. Instituto de Defensa Legal. N° 70, noviembre de 1994, Lima. p. 59.

AVILA, Diana., CORONEL, José y VALDEZ, Flor de María. «Desplazados: en búsqueda de futuro». Rev. IDEELE. Instituto de Defensa Legal. N° 70, noviembre de 1994, Lima. p. 48 y ss.

CASTAÑO H., Bertha y LOPEZ R., Pedro. «Efectos psico-sociales del desplazamiento interno en Colombia». Corporación AVRE. Seminario Taller: Políticas Integrales para el desplazamiento Interno en Colombia. Bogotá, junio de 1994.

DENG, Francis. Representante del Secretario General de la ONU, cuyo informe fue presentado en cumplimiento de la resolución 1993/95 de la Comisión de Derechos Humanos. «Los desplazados internos». E/CN.4/1995/50/Add.1, 3 de octubre de 1994.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. «Alternativas de solución al problema de los desplazados por violencia». Seminario Taller: Políticas Integrales para el desplazamiento Interno en Colombia. Bogotá, junio de 1994.

Exodos en América Latina. La Migración por Violencia en Centroamérica, 1980-1990. Instituto Interamericano Derechos Humanos. San José, 1992. 193 p.

GARCÍA, Gloria P. y MONTOYA, Gloria P. Aproximación al diagnóstico del proceso salud-enfermedad de un barrio de invasión de la ciudad de Medellín. Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública. Medellín, 1991. Pág 64-66 y 115-121.

GIRALDO, Javier, S.J. «El Desplazamiento Forzado en Colombia». Memorias del Seminario-Foro Nacional. Chinautá, noviembre de 1991. ILSA, Bogotá, 1992.

GRUPO DE TRABAJO CON DESPLAZADOS. «Líneas de acción frente al desplazamiento y en favor de la población desplazada. Seminario Taller: Políticas Integrales para el desplazamiento Interno en Colombia. Bogotá, junio de 1994.

HERNÁNDEZ, Mauricio y FRANCO, Martha. Desplazados Internos en Colombia. Revista Derechos Humanos, Nº20. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Bogotá, abril-junio de 1993. pág 26-27

MEDINA, Gilberto y ARIAS, Edgar. *Los Jóvenes Protagonistas de Violencia y Paz*. Instituto Popular de Capacitación, IPC. Medellín, septiembre de 1994. Mimeo.

Memorias del Seminario-Foro Nacional: «El Desplazamiento Interno en Colombia». Chinauta, noviembre de 1991. ILSA, Bogotá, 1992. 168 Pág.

Presidencia de la República. *Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Programa de Solidaridad y Emergencia Social. «Resumen del Informe Final de Asistencia Técnica sobre Desplazamiento Interno en Colombia. Realizado por la consulta permanente sobre desplazamiento interno en las Américas. Noviembre de 1993. Medellín, mayo de 1994.*

QUINTERO, Blanca R. *Población civil desplazada: Terceros inocentes*. Revista *Derechos Humanos*, N°22. *Consejería Presidencial para los Derechos Humanos*. Bogotá, mayo-agosto e 1994. pág 16-21

Revista Cien Días. CINEP, N° 9, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, *Santafé de Bogotá*, 1990 a 1994.

Revista Justicia y Paz. *Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz*, N° 1 y 3 del Volumen 6 y N° 1 del Volumen 7. Bogotá, 1993 a 1994.

Revista Su Defensor. *Defensoría del Pueblo*, N° 1 y 21, Bogotá, 1993 y 1995 respectivamente.

REYES P., Alejandro. *«Violencia y Desplazamiento Forzoso en Colombia»*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de La Universidad Nacional. Seminario Taller: *Políticas Integrales para el desplazamiento Interno en Colombia*. Bogotá, junio de 1994.

STAINSBY, Richard. «Mecanismos Internacionales de Protección Jurídica de los Refugiados». En *Espacios Internacionales para la Justicia Colombiana. Vol II. Comisión Andina de Juristas, Sección Colombiana. Bogotá, noviembre de 1993. Pág. 150*

VALENCIA V., Alejandro. «Líneas de acción para superar el problema del desplazamiento interno en Colombia». Dirección Nacional de Atención y trámite de quejas, Defensoría del Pueblo. Seminario Taller: *Políticas Integrales para el desplazamiento Interno en Colombia. Bogotá, junio de 1994.*

VALENCIA V., Hernando. «Conflicto Armado y Exodo Interno en Colombia». En *Espacios Internacionales para la Justicia Colombiana. Vol II. Comisión Andina de Juristas, Sección Colombiana. Bogotá, diciembre de 1993. Pág. 167*

----- «La Procuraduría General de la Nación Frente al desplazamiento Forzado como Problema de Derechos Humanos en Colombia». Procurador Delegado para los derechos Humanos. Seminario Taller: *Políticas Integrales para el desplazamiento Interno en Colombia. Bogotá, junio de 1994.*

VARGAS V., Alejo. «Aspectos socio-políticos y culturales del Desplazamiento. Hacia una política frente a esta situación socialmente problemática». Seminario Taller: *Políticas Integrales para el desplazamiento Interno en Colombia. Bogotá, junio de 1994.*

YO QUE BUSCABA EL MAR

Y yo que buscaba el mar
y encontré los muertos
apiñados como racimos de bananos
en las tierras de Abibe que nombran Urabá
en la carreteras
en el pastizal
en el platanal
en la acera
y frente a mi casa

Y yo que buscaba el mar
y encontré los muertos
abrazados uno a uno
boca a boca contra el piso
con los olores exhalados
por el vapor del mar
que navega Sardanápalo
engreído
petulante

Y yo que buscaba el mar
y encuentre los muertos
en el cenicero de los catafalcos negros
frios
serenos
ecuánimes
alertándome
Juan : no llegues nunca al mar

Juan no llegues nunca al mar
del Océano Atlántico
de las costas caribes
de la grande U
grave y sin tilde
en donde los muertos
de todos los ríos
desembocan,
desembocan, ay!
Como palos náufragos del Atrato

Y yo que buscaba el mar...

Juan Gil Blas